

proceso

LOS
DESACATOS
DEL PODER

\$70.00



7 503038 023650

Primera infancia, las prioridades para el 2024-2030

Aspirantes a la Presidencia de la República Mexicana:

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata por la Coalición Fuerza y Corazón por México. PRI-PAN-PRD.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata por la Coalición "Sigamos Haciendo Historia". Morena, PT y PVEM.

PRESENTES

El panorama que enfrenta la primera infancia en México es desalentador.

Preocupa el porcentaje de niños y niñas en situación de pobreza (48.1%) y pobreza extrema (11.6%). La limitada cobertura de acceso a servicios de cuidado y educación inicial se mantiene en niveles mínimos (3%). La carencia por acceso a servicios de salud se triplicó, pasando de 18% en 2018 a 46% en 2024. Asimismo, los 135 homicidios en primera infancia, en 2022, reflejan la inseguridad que viven niñas y niños.

El organismo rector de la política en materia de niñez, SIPINNA, enfrenta debilidades significativas: existe una falta de integración interinstitucional y perspectiva de niñez en los programas gubernamentales y un carente impulso al PRONAPINNA y a la ENAPI, como ejes angulares de la infraestructura e implementación de las políticas públicas.

Urge adoptar medidas coordinadas para mejorar la situación actual. Por ello, Early Institute ha desarrollado una serie de recomendaciones que deben ser atendidas por quienes buscan liderar el país.

- 1.- Poner como prioridad a la primera infancia en la agenda de gobierno, con una visión de largo plazo.
- 2.- Fortalecer la gobernanza y coordinación intersectorial en todos los niveles de gobierno, sin importar partidos o diferencias de tipo electoral, para el desarrollo de políticas públicas de primera infancia.
- 3.- Impulsar la Política Nacional de Educación Inicial para ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios, y promocionar prácticas de crianza positiva.
- 4.- Reconocer el derecho al cuidado y crear un Sistema Nacional de Cuidados, cuyo seguimiento sea anual, medible y evaluable.
- 5.- Invertir en programas sociales de transferencias monetarias condicionadas con educación, salud, nutrición y crianza positiva.
- 6.- Asegurar el acceso universal y la calidad de los servicios de salud para las niñas, los niños y sus madres.
- 7.- Garantizar que todos los niños y las niñas reciban vacunas completas.

8.- Reforzar la atención de primer nivel y brindar consejería sobre lactancia materna, desarrollo infantil temprano, nutrición, sobrepeso y obesidad infantil.

9.- Fortalecer el Sistema Judicial mediante el reforzamiento del marco normativo de prevención y atención de la violencia, la capacitación y sensibilización de servidores públicos del poder judicial; así como la mejora de protocolos y procesos de actuación que permitan colocar en el centro a niñas y niños víctimas de cualquier forma de violencia en su contra.

10.- Planificar un incremento progresivo de los recursos asignados a primera infancia por parte de todos los ejecutores de gasto, que corresponda a la proporción que representa esta población y plena coordinación con los actores estatales y municipales que corresponda.

Señoras y señor candidatos a la Presidencia de la República Mexicana:

Es del conocimiento público que han suscrito compromisos a favor de la primera infancia alineados a los puntos anteriormente descritos. Es momento de cumplirlos y llevar a cabo, a partir del 3 de junio próximo, desde los equipos de transición y el eventual gabinete entrante, una ruta integral de acciones prioritarias para superar la fase del diagnóstico y pasar al terreno de la acción urgente en materia de inversión presupuestaria y prioridad a la atención y desarrollo de la protección de niñas y niños, especialmente a los más vulnerables.

La agenda de primera infancia no es un asunto electoral ni de campañas políticas, representa una decisión de Estado y el eje vertebral para el diseño e implementación de políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo que permitirá el verdadero desarrollo social de México.

**ATENTAMENTE
EARLY INSTITUTE**

earlyi

Conocer más. Decidir mejor.

www.earlyinstitute.org



CENTINELAS DE SEMILLAS

**LA FES IZTACALA RESGUARDA
EL 13 % DE LAS SIMIENTES
DE PLANTAS DEL PAÍS,**

el más grande banco de especies
silvestres, endémicas y nativas,
algunas en peligro de extinción

Conserva 3,100 variedades
recolectadas en 26 estados,
desde hierbas de 10 centímetros
hasta árboles de 25 metros

proceso

Edición Mensual de Información y Análisis

CISA / Comunicación e Información, S.A. de C.V.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Rafael Rodríguez Castañeda, presidente;
María Scherer Ibarra, secretaria; Estela Franco Arroyo; Jorge Carrasco Araizaga, director

DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García †

SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †

DIRECTOR: Jorge Carrasco Araizaga - jcarrasco@proceso.com.mx -

Tel. 55-5636-2000, extensión 1009

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera - arivera@proceso.com.mx -

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN EDITORIAL: Cecilia Rivera - cecilia.rivera@proceso.com.mx -
Tel. 55-5636-2000, extensión 1009

EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Jaime Contreras, coordinador

REPORTEROS: Dalila Escobar, Gloria Leticia Díaz, Diana Lastiri, Sara Pantoja,

Arturo Rodríguez, Mathieu Tourliere

CORRESPONSALES NACIONALES: Verónica Espinosa, coordinadora;

Guanajuato, Verónica Espinosa; Puebla, María Gabriela Hernández

CORRESPONSALES INTERNACIONALES: Madrid, Alejandro Cutiérrerz;

Washington, J. Jesús Esquivel

CULTURA Y ESPECTÁCULOS: Armando Ponce, editor; Niza Rivera Medina,

Columba Vértiz de la Fuente, reporteras - Colaboradores: Javier Betancourt,

Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco - cultura@proceso.com.mx -

DEPORTES: Beatriz Pereyra, editora; Karla Cabral, Ricardo Olin, reporteros

JEFE DE AUDIOVISUAL: José Manuel Jiménez \ jose.jimenez@proceso.com.mx -

Tel. 55-5636-2000, extensión 1017

FOTÓGRAFOS: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Eduardo Miranda;

Aurora Trejo, asistente

ANÁLISIS: Elisur Arteaga Nava, Agustín Basave, Ariel Dorfman, Tonatiuh Guillén López,
Carlos Martínez Assad, Olga Pellicer, Alberto Pérez Dayán, Javier Sicilia, Ernesto Villanueva;
cartonista: José Antonio Rodríguez

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador

DISEÑO: Antonio Fouilloux Dávila, Juan Ricardo Robles

COMERCIALIZACIÓN Y PUBLICIDAD: Tel. 55-5636-2000, extensiones 1024, 1003 y 1009

CIRCULACIÓN Y REPARTO: Pascual Acuña

Tel. 55-5636-2000, extensiones 1015 y 1013

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Jesús Corona, jefe; Eduardo Alfaro,

MANTENIMIENTO: Miguel Olvera

COBRANZAS: Laura Ávila, jefa

OFICINAS: Fresas 13, Col. Del Valle, 03100, CDMX

CONMUTADOR: Karina Ureña - Tel. 55-5636-2000

PALABRA DE LECTOR: palabradelector@proceso.com.mx

AÑO 47, MAYO 2024

IMPRESIÓN: Servicios Profesionales de Impresión S.A. de C.V., Mimosas 31,
Col. Santa María Insurgentes, 06430, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

DISTRIBUIDOR: Prestadora de servicios CIPRO, S.A. de C.V., Fresas 9, Col. Del Valle, 03100, CDMX

EDITOR RESPONSABLE: Jorge Carrasco Araizaga

SUSCRIPCIONES: Laura Ávila - Tel. 55-5636-2000,
extensiones 1003, 1004, 1014 y 1026
Precio de venta ejemplar: \$70.00
Suscripciones en Ciudad de México y Zona Metropolitana

IMPRESO:
ANUAL \$700.00
SEMESTRAL \$370.00

DIGITAL:
ANUAL \$540.00
SEMESTRAL \$290.00
TRIMESTRAL \$150.00



Imagen de portada:
Montserrat López

06

PRESIDENCIA

Suprema Corte vs. Presidencia:
una pugna entre poderes que
raya en el desacato

DIANA LASTIRI

Con la 4T, retrocesos
en salud y pobreza
en primera infancia

GLORIA LETICIA DÍAZ

18

JUSTICIA

Muertes sospechosas
en la cárcel femenil
de Morelos

DIANA LASTIRI

PRECIO DE VENTA

\$70.00

Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión.
Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una
Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho
de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-
102. Número ISSN: 1665-9309.

Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios. Registro No. 105 / 23

Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin
autorización expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos.

389d1128-5107-430f-bc9f-d57384cbf62a

apro

EDITORIA: María Luisa Vivas

Agencia Proceso de información

26

NARCOTRÁFICO

Cozumel, el nuevo objeto
del deseo del narco

OCTAVIO MARTÍNEZ

32

POLÍTICA EXTERIOR

El correísmo se asienta en México
de la mano de AMLO

DALILA ESCOBAR

38

MIGRACIÓN

Deportados por ser colombianos

RAFAEL CRODA

Exigen a Petro reclamo
enérgico ante AMLO

RAFAEL CRODA

46

MINERÍA

Una minera se lleva el oro
y deja pozos secos, peces
deformes y magras cosechas

PEDRO MATÍAS

52

OPINIÓN

Voto retrospectivo

KAROLINA GILAS

Violencia y campañas

JAVIER SICILIA

Candidaturas presidenciales,
sin comprender la nueva
migración mexicana

TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ

Irán y su ensayo estratégico

CARLOS MARTÍNEZ ASSAD

60

INTERNACIONAL

Las guerras de Ucrania y
Palestina ponen a prueba
a la Unión Europea

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

66

CULTURA

Espacio Escultórico y paisaje:
Valoran en Italia la grandeza
de Ciudad Universitaria

NIZA RIVERA

Francisco J. Múgica:
No fue presidente, pero sus ideas
siguen marcando agenda

JUDITH AMADOR TELLO

74

DEPORTES

Palcohabientes del
Estadio Azteca:

"Respeten nuestra propiedad
o enfrentarán un poder
muy fuerte"

RICARDO OLÍN

80

PALABRA DE LECTOR

Señalamientos de
Eduardo López Betancourt
sobre el fiscal Gertz Manero

82

CARTÓN

"Triunfalismo riesgoso"

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

procesofoto
Agencia de fotografía

procesofoto.com.mx • rednacional@procesofoto.com.mx
VENTAS Y CONTRATACIONES:
Tel. 55-5636-2000, extensiones 1017 y 1016

VISITA NUESTRA
PÁGINA

proceso DIGITAL



JEFE DE EDICIÓN DIGITAL: Santiago Igarúa Scherer
55-5636-2000 • rednacional@procesofoto.com.mx
JEFA DE INFORMACIÓN: María Luisa Vivas
luisa.vivas@proceso.com.mx Tel. 55-5636-2000, extensión 1012
EDITORES: Norma Carrasco, Marco Gonsen, Rodrigo Hernández,
Carlos Olvera, Julio de la Torre
MULTIMEDIA: Carlos Enciso

ISSN 1128-5107 • 4301-ACT-0057384cb62a





Suprema Corte vs. Presidencia: UNA PUGNA ENTRE PODERES que raya en el desacato

DIANA LASTIRI

En el contexto del continuo enfrentamiento entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Poder Ejecutivo federal, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Legislativo —de mayoría morenista con aliados— han decidido incumplir las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra leyes y reformas impulsadas por la actual administración de la 4T.

Proceso verificó vía datos públicos de la Corte que por lo menos en nueve ocasiones el presidente y los legisladores oficialistas han hecho caso omiso de las resoluciones del Máximo Tribunal pese a que, conforme a los procedimientos, los ministros han enviado diversos requerimientos de informes.

El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la clasificación de las obras prioritarias del gobierno



La Suprema Corte, entre dos fuegos:
el presidencial y el legislativo

Foto: SCJN / Cuartoscuro.com

El traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, la clasificación de seguridad nacional sobre megaobras como el Tren Maya y la Ley de Comunicación Social son algunos de los asuntos de interés nacional en los cuales la Suprema Corte ha emitido sentencias y éstas han sido ignoradas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sin importar la parálisis causada a órganos como el INAI y de que el incumplimiento de las resoluciones del Máximo Tribunal, de acuerdo con la Constitución, puede derivar en la destitución y consignación de los funcionarios responsables.

como de seguridad nacional para reservar su información, la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia, entre otras materias, han sido objeto de estos incumplimientos. En todas, el presidente ha expresado su rechazo a las decisiones del Máximo Tribunal.

De acuerdo con la Constitución, el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte o los jueces de amparo puede

derivar en la destitución y consignación de los funcionarios responsables.

Para que la Suprema Corte pueda iniciar los requerimientos para el cumplimiento de sus sentencias, deben solicitarlo quienes tramitaron las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales o los amparos respectivos.

Por lo que muchas veces la ejecución de las resoluciones depende también de los pactos que puedan realizar los actores políticos en los días y meses siguientes al dictado de las sentencias.

El 5 de abril último la ministra Lenia Batres, designada directamente por el presidente López Obrador, dijo que

desde 1995 la Corte ha emitido 100 sentencias en las que ha invalidado leyes, 74 de ellas fueron resueltas en lo que va del sexenio, aunque no todas se refieren a legislaciones emitidas durante la presente administración, pues la Suprema Corte puede tardar años en analizar un asunto.

Casos emblemáticos

Uno de los incumplimientos más evidentes por parte del Congreso de la Unión es la falta de designación de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha sido impugnado de manera reiterada por López Obrador.

Desde el 1 de abril de 2023 el INAI se quedó sin quorum para sesionar, pues el 30 de marzo de ese año el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas concluyó su periodo dentro del organismo en el contexto de los reiterados rechazos de los senadores para concretar, por lo menos, un nombramiento para completar los cinco comisionados requeridos para realizar sesiones.

El organismo tramitó una controversia constitucional ante la Corte contra la falta de designación de comisionados, en la cual solicitó una suspensión provisional para que pudiera sesionar con los cuatro comisionados que actualmente integran el organismo dotando de voto de calidad a la excomisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

El Máximo Tribunal concedió la suspensión, y para el 2 de octubre de 2023 determinó que el Senado incurrió en omisión y ordenó realizar el proceso de designación de dos comisionados durante el periodo ordinario de sesiones que entonces estaba en curso.

"El Senado ha sido omiso en nombrar, dentro de un plazo razonable, a las personas comisionadas que las ocu-

parán. Esto ha generado, como también quedó ya ampliamente desarrollado, una vulneración al diseño constitucional del INAI y adicionalmente, una paralización de su órgano plenario. Con ello se ha vulnerado el ámbito competencial del Instituto actor a grado tal que se le ha impedido ejercer las facultades que garantizan no solamente su autonomía, sino también la defensa de los derechos de transparencia, acceso a la información y protección de datos que tiene por objeto garantizar", expone la sentencia de la SCJN.

El periodo de sesiones en el que el Senado debía designar a los comisionados concluyó en diciembre de 2023 y el periodo que le siguió culminó el 30 de abril último sin que los legisladores logren cumplir con el mandato de la Corte, debido a que no se reúnen los votos suficientes para hacerlo.

Por ello, en febrero pasado el Senado solicitó a la Corte establecer un nuevo plazo "razonable" para hacer las designaciones.

Tren Maya. Resolución de la Corte contra la opacidad

Foto: Michael Balam Chan @Cuartoscuro



El 16 de febrero la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, explicó que el término fue concedido en la sentencia emitida por el Pleno, por lo que ella no tiene facultades para otorgar uno nuevo y sólo concedió 10 días hábiles para que el Senado informe sobre las diligencias de cumplimiento de la resolución.

El 27 de enero de 2022 la SCJN declaró que el Congreso de la Unión ha sido omiso al no expedir la Ley General de Aguas, pues desde 2013 venció el plazo fijado por el propio Poder Ejecutivo para hacerlo.

Así, los ministros conminaron al Congreso a emitir la ley durante el siguiente periodo ordinario de sesiones al dictado de la sentencia. Sin embargo, hasta el momento no existen registros de que el Poder Legislativo haya, siquiera, informado alguna acción para cumplir.

Desde mayo de 2023 la Corte notificó al Congreso la decisión de invalidar la reforma enmarcada en el Plan B electoral del Presidente a la Ley de Comunicación Social con la que se beneficiaba a un pequeño grupo de medios de comunicación en la asignación de publicidad oficial.

En su resolución el Pleno determinó que el Poder Legislativo incumplió con una sentencia emitida por la Primera Sala desde el año 2021 en la que se ordenó erradicar de la legislación el uso del gasto de comunicación social como un mecanismo de "mordaza" para los medios.

Sin embargo, hasta el momento la Corte no tiene registro de ningún documento en el que el Legislativo informe sobre qué ha hecho para cumplir.

El 14 de abril de 2023 los ministros invalidaron la reforma al Código Penal Militar que permitía a los integrantes del Ejército intervenir comunicaciones privadas sin previa autorización judicial y ordenaron al Congreso regular la intervención de personas indígenas o con discapacidad en los procesos penales militares.

Para ello, el Congreso debía realizar una consulta pública a dichos grupos y la sentencia surtiría efectos a los 12 meses siguientes.

El plazo para cumplir venció el pasado 19 de abril, pero desde marzo de este año la Corte requirió al Congreso informar sobre el cumplimiento y hasta el momento no hay registro de que el Legislativo remitiera dicho informe.

Ignoran amparos

Los incumplimientos no sólo se registran en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, también en amparos que han sido revisados por la Corte al tratarse de temas de interés nacional.

Desde el 10 de junio de 2020 la SCJN determinó en un amparo en revisión que el Congreso de la Unión incurrió en omisión legislativa absoluta porque no ha emitido la Ley General de la Consulta Previa, Libre, Informada, Adecuada Culturalmente y de Buena Fe, conforme a la recomendación general dictada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde julio de 2016.

El Congreso lleva casi cuatro años sin cumplir esta sentencia, al igual que en el amparo en revisión en el que ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) generar información para que las autoridades implementen políticas públicas de sectores desprotegidos en materia de vivienda.

La sentencia fue emitida el 17 de junio de 2020, en ella los ministros indicaron al INEGI que debía realizar censos y acciones necesarias para recabar información desagregada sobre asentamientos informales o irregulares en situación de pobreza.

El amparo fue tramitado por la organización TECHO México, que argumentó que el INEGI tenía que presentar un plan de trabajo para señalar cómo generará esa información estadística, para lo cual la quejosa ofreció al instituto conformar una mesa de trabajo interdisciplinaria para apoyar en la construcción de la metodología.

De acuerdo con los registros legislativos, aunque la Corte no ordenó emitir ninguna reforma, existe una iniciativa de modificación a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para especificar la obligación de recabar información sobre asentamientos irregulares, pero no ha prosperado.

Si bien el Congreso de la Unión no está en incumplimiento, el INEGI sí porque no cuenta con datos duros sobre asentamientos humanos irregulares.

El dictado de nuevos actos similares a los que ya fueron invalidados es otra forma con la cual el Ejecutivo y el Legislativo eluden sus obligaciones de cumplimiento de las sentencias que emite el Poder Judicial de la Federación.



Así ocurrió con la declaratoria de interés público y seguridad nacional de las obras prioritarias del gobierno y con la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El 22 de mayo de 2023 la Corte invalidó el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal para clasificar como seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno, entre las que se encuentran el Tren Maya, el AIFA o la Refinería Dos Bocas.

Con esta determinación toda la información sobre el gasto y contrataciones para estas obras quedaba automáticamente clasificada como reservada.

Antes de que la Corte emitiera su sentencia, y anticipándose a la invalidez del acuerdo presidencial, el 18 de mayo de 2023 el presidente López Obrador publicó un decreto en los mismos términos que el impugnado ante el Máximo Tribunal.

La Cámara de Diputados intentó tramitar una controversia constitucional contra ese decreto, pero fue desechada porque el presidente de la Mesa Directiva de dicha cámara no tiene legitimación para realizar este tipo de trámites y el INAI, que sí tenía facultades para impugnar, no pudo hacerlo porque para ese momento no contaba con la suspensión provisional que le permite sesionar con cuatro comisionados, y ese tipo de trámites deben ser avalados por el Pleno de dicho organismo.

El 20 de marzo de 2023 los ministros invalidaron el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y ordenaron que, a partir del 1 de enero de este año, se concrete el regreso de dicha corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque ya venció el plazo de cumplimiento ni la Sedena ni el Ejecutivo federal han informado sobre las diligencias para ejecutar la sentencia de la Corte.

Entre los argumentos de los ministros para invalidar la militarización de la GN está que constitucionalmente dicha corporación tiene un carácter civil y para modificarlo se requiere una reforma a la Carta Magna.

Al día siguiente de la sesión en la que los ministros emitieron su fallo, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los ocho que votaron por declarar inconstitucional la militarización de la GN y anunció la presentación de una reforma constitucional para lograr su cometido, lo que cumplió el 5 de febrero último y cuya iniciativa será analizada por la nueva conformación del Legislativo que resulte de las elecciones de junio próximo. ☞

FERIA DE LAS ESTRELLAS

DEL **13 ABRIL**
AL **5 MAYO**



FERIA NACIONAL

SAN MARCOS 2024



GOBIERNO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ABRIL

- ENRIQUE IGLESIAS** SHOW ESPECIAL
12 CONTEO REGRESIVO 26 DON DIABLO 13 BELANOVA 14 ALICIA VILLARREAL 15 JULIO PRECIADO
16 STING 17 EL FANTASMA 18 SECH 19 MANUEL CARRASCO 20 CARLOS BAUTE
21 LUCHA LIBRE 22 SINFÓNICA MILITAR
23 **CHRISTINA AGUILERA** SHOW ESPECIAL
24 CONJUNTO PRIMAVERA 25 PLÁCIDO DOMINGO 27 ICONS OF CLASSIC ROCK
28 SEBASTIAN YATRA 29 ORIGINAL BANDA EL LIMÓN 30 MARIA BECERRA

MAYO

- 1 WISIN 2 CARDENALES E INVASORES DE N.L. 3 **TOTO**
4 IL DIVO 5 **ALEJANDRO SANZ**

ACCESO GRATUITO



AGUASCALIENTES • MX

Con la 4T, RETROCESOS EN SALUD Y POBREZA en primera infancia

Investigadores del Early Institute aseveran que en este sexenio no sólo se contuvo la inversión destinada a primera infancia, sino que se eliminaron o sustituyeron programas sociales que habían paliado las carencias que sufre este grupo etario. Los datos del instituto revelan que uno de cada diez niños de entre cero y cinco años está en pobreza extrema, mientras que 50% está en pobreza, esto es, uno de cada dos infantes.



Derecho a la salud, tema pendiente
Foto: Germán Canseco

GLORIA LETICIA DÍAZ

Representan 10% de la población en México, son los más pobres, los más vulnerables y también los más olvidados durante décadas, a los que los gobiernos de distintas denominaciones políticas les han destinado menos de 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de más 12 millones de infantes mexicanos de entre cero y cinco años, etapa a la que se identifica como la primera infancia.

En la desatención de esta población, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción, alertan Renata Díaz Barreiro Castro y Cándido Pérez Hernández, investigadores de Early Institute, organización civil dedicada a la incidencia en políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la primera infancia. Para ello ha construido el Sistema de Indicadores de la Primera Infancia (SIPI), una plataforma que monitorea las condiciones de salud, nutrición, cuidado responsable, educación, seguridad y protección y pobreza de la niñez de entre cero a cinco años de edad en México.

Con base en datos oficiales, sistematizados y concentrados en el SIPI, en entrevista en conjunto los investigadores del Early Institute han prendido algunos focos de alerta en el contexto de la conclusión del actual sexenio y en vistas al próximo cambio de gobierno que surja de la elección del 2 de junio próximo.

Coordinadora del proyecto SIPI, Díaz Barreiro destaca como “uno de los focos rojos” que tienen que tomarse en cuenta para la próxima administración es que la inseguridad en el país también está afectando de manera preocupante a la población menor de cinco años.

Tras alertar que un estudio de 2003 de la oficina de Drogas y el Delito de la ONU develó que “la tasa de homicidios intencionales en México es cinco veces más alta que el promedio mundial, que es de 5.8 por cada 100 mil habitantes, mientras que nuestro país es de 26 asesinatos

por cada 100 mil habitantes”, Díaz Barreiro Castro consideró que “tenemos un problema definitivo de seguridad pública y esto también se ve reflejado y permeado en la niñez en México”.

Como efectos de la inseguridad, expuestos en bases de datos públicos de INEGI y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la investigadora destaca que 135 niños y niñas de primera infancia fueron asesinados en 2022; ese año se integraron dos mil 438 carpetas de investigación por violencia sexual contra esa población frente a dos mil 78 averiguaciones abiertas en 2021; en 2023 se tenían registradas 368 personas desaparecidas de primera infancia.

“Estamos hablando de una violencia terrible, como también lo es saber que al menos 93% de los delitos no se denuncian, y que 12% de mujeres, esto es seis millones de personas, habrían sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir 15 años, sin que sepamos cuántas de ellas sufrieron los abusos en primera infancia”, apunta Díaz Barreiro.

La investigadora del Early Institute advierte que la situación de inseguridad en primera infancia se agrava al considerar que prevalece un contexto de pobreza que dificulta el acceso a la justicia.

Abunda que precisamente otra señal de alarma es la persistencia de la pobreza extrema en México, que “no se modificó para nada en primera infancia, 12%, esto es, uno de cada diez niños está en pobreza extrema, mientras que 50% está en pobreza, esto es, uno de cada dos niños”.

Tomando como parámetro las consideraciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de que una persona con pobreza extrema registra al menos tres carencias sociales, relacionadas con los derechos a la salud, a vivienda, educación, seguridad social, alimentación y los servicios, la investigadora advierte que es ahí donde los infantes resultan más afectados.

Primera infancia. Carencias

Foto: José Luis de la Cruz / Procesofoto



“Ha aumentado considerablemente el número de las personas con al menos tres carencias sociales, mientras en 2018 los datos estaban en 22%, en 2020 llegamos a 26% y en 2022 a 30%, es decir, entre 2020 y 2022 aumentamos la población en pobreza extrema en 15%, lo cual deriva en que están vulnerando los derechos más fundamentales de los niños, aunque no haya aumentado el número de pobres”, resalta la investigadora.

Pérez Hernández acota con números: hay cinco millones 900 mil niños y niñas de entre cero y cinco años pobres, y un millón 420 mil en situación de pobreza extrema, si se toma en cuenta que la población total es de 12 millones 226 mil 266 personas en ese rango de edad en México.

“Históricamente este sector de la población ha sido muy olvidado. En números generales a niños, niñas y adolescentes se destina más o menos 3% del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), lo cual no tiene concordancia con lo que representa en la población, porque uno de cada tres mexicanos tiene entre cero y 17 años, pero en caso de primera infancia el porcentaje está aún más lejano de ser congruente con lo que representa en términos solamente de población, que es de entre 0.6 a 0.7% del PIB”, puntualiza Pérez Hernández.

Los investigadores alertan que en este sexenio no sólo se contuvo la inversión destinada a primera infancia, dando continuidad a periodos gubernamentales anteriores, sino que se eliminaron o sustituyeron programas sociales que en sexenios anteriores habían ayudado en algo a paliar las carencias que sufre este grupo etario, aunque no estuviera precisamente destinada a ese sector.

Uno de esos programas desaparecidos fue el de Estancias Infantiles, dirigido a padres y madres de 15 años y más, "con hijas e hijos de uno a cuatro años, sin acceso a seguridad social de manera directa o por parentesco con el jefe del hogar, en hogares con ingreso estimado per cápita por debajo de la línea de bienestar, que además se encuentre disponible, desocupada, subcontratada u ocupada en el sector informal". De acuerdo con el informe del Coneval, en 2017 se registró una cobertura de 310 mil 968 madres y padres solos, atendiendo a 327 mil 854 niños y niñas, para lo que se contó con un presupuesto de tres mil 118 millones.

Con diez años de operación, al cierre de 2017 el Coneval lo clasificó como "un programa social exitoso", que consistía en dar a cada madre o padre inscritos en el programa 900 pesos mensuales por niña o niño de entre uno a tres años 11 meses de edad, o mil 800 pesos si el menor presentaba alguna discapacidad, para lo cual el apoyo se ampliaba a niños de uno a cinco años 11 meses, recursos que se destinaban a la contratación de servicios de cuidado y atención infantil. De 2007 a 2017 el programa benefició a "un millón 825 mil 394 madres y padres solos y ha atendido a dos millones 174 mil 415 niños y niñas" de mil 300 municipios y dos mil 169 localidades, según datos del Coneval.

El programa contemplaba el financiamiento de nueve mil 399 estancias infantiles, a través del apoyo a personas morales y físicas con 70 mil pesos para adecuar espacios para atender a los menores.

A principios de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López sustituyó ese programa por el de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que se traduce en transferencias monetarias de mil 600 pesos bimestrales por beneficiario.

De acuerdo con el último informe del Coneval, en 2023 ese programa tuvo un presupuesto de dos mil 313 millones de pesos, para un universo de 335 mil 237 personas beneficiarias identificadas como "niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad por ausencia de uno o de ambos padres".

Los investigadores coinciden en que si bien las Estancias Infantiles estaban orientadas a la integración de las mujeres al mercado laboral, por ser tradicionalmente quienes atienden a la población infantil, los menores se veían beneficiados en términos de salud, educación, alimentación y cuidados especiales por un programa que contaba con la supervisión de una institución como el Coneval.

Ahora, con el nuevo programa, "aunque se dan transferencias monetarias, no alcanzan para acceder a las guarderías en México, ni siquiera sabemos el número exacto de estos establecimientos ni el impacto en niños y niñas en edad de educación inicial", dice Díaz Barreiro.

Añade Pérez Hernández: "Por la forma en que está diseñado el programa ahora, se supondría que esa transferencia tendría que ser destinada para cubrir una cuota dentro de un centro educativo de primera infancia, pero en la realidad las personas pueden hacerlo o no, no hay manera de darle seguimiento".

Entre los derechos más vulnerados por el abandono institucional figura el acceso a la salud y alimentación, retoma Díaz Barreiro.

"La población infantil que tenía esta carencia en 2018 era de 17.6%; en 2020 pasó a 31%, y en 2022 se amplió a 45%, esto significa que si medimos de 2020 a 2022, hubo un aumento de 50% en el número de niños y niñas que no tienen acceso a la salud; es un impacto muy grave".

Gracias a la sistematización de la información oficial, que se encuentra fragmentada en distintas bases de datos, a través del SIPI es posible dimensionar cómo se encuentra la población más vulnerable de México, en aspectos tan básicos como la evolución de la vacunación en primera infancia en los últimos cuatro sexenios.

De acuerdo con la plataforma, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), la población de niños de un año con esquema de vacunación completo tenía un registro de 26.5% en 2000; seis años después, alcanzó a 78.4% de esa población; en 2012, la proporción era de 74.2%, para caer drásticamente a 19.9% en 2018 y empezar a recuperarse en 2021, con una cobertura de 31.1%, y en 2022 de 42.6 por ciento.

En cuanto a la alimentación, la investigadora resalta que 20% de los niños y niñas de cero a cinco años de edad no tiene acceso a alimentación nutritiva y de calidad, en tanto que 7.7% padece sobrepeso y obesidad.

Estos datos hablan de “los malos hábitos alimenticios sin duda, y que, si ya estamos partiendo de estos niveles de sobrepeso en primera infancia, van a tener un impacto también significativo cuando crezcan los niños en la infancia, adolescencia y vida adulta”, apunta Renata Díaz Barreiro.

Cándido Pérez Hernández resalta que “gran parte de la razón de ser del SIPI, el proyecto del Early Institute, es que la primera infancia tiene que ocupar un lugar preponderante dentro de las políticas públicas de nuestro país, dentro de nuestro marco normativo, dentro de las propuestas que se plantean para el siguiente sexenio, siendo una cuestión fundamental reconocer que es insostenible seguir pensando en un presupuesto como el que está actualmente, el nivel de preponderancia de la primera infancia debe reflejarse en un presupuesto que se ha planteado desde diferentes organismos internacionales”.

Renata Díaz Barreiro insiste en que considerando el nivel de impunidad que impera en el país y sobre todo en casos en los que menores son víctimas de delitos graves, “no puede ser que no haya una indignación por cada niño, niña o adolescente que sufre esos delitos. Es urgente que el sistema de seguridad tenga ya un cambio y que haya este acceso a la justicia, que si se abre una carpeta de investigación se cierre favorablemente, que haya resarcimiento y acompañamiento para las víctimas, que no sea un proceso revictimizante”.

Díaz Barreiro. Inseguridad en el país, “foco rojo”

Foto: Tomada de video



MUERTES SOSPECHOSAS

en la cárcel femenil
de Morelos

Centro Federal de Readaptación Social 16. Único en su tipo

Foto: Miguel Dimayuga

En menos de cuatro años, 15 mujeres han muerto en el Cefereso de Morelos. Es la cifra referida por las autoridades federales como suicidios, pero en ninguno de los casos han mostrado evidencias. La incorporación de esta prisión al sistema penitenciario federal propició su sobrepoblación, pues llegaron reclusas de otros penales, lo cual las aisló de sus familiares. Defensores públicos aseguran que la continua violación a sus derechos de salud, que equiparan a actos de tortura, es la causa probable de esas defunciones. Quienes gobiernan el penal, la federación y una empresa de Carlos Slim, se lavan las manos.

DIANA LASTIRI

En los últimos cuatro años han fallecido 15 mujeres dentro del Centro Federal de Readaptación Social 16 (Cefereso 16) CPS Femenil de Morelos, único de su tipo en el país; 11 de ellas sólo en 2023. Las autoridades han catalogado estas muertes como suicidios, por lo que el incremento de estos casos, en un periodo de seis meses, es un problema latente.

Por la muerte de las últimas 13, ocurridas entre 2022 y 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que documentó violaciones al derecho a la salud de las internas, a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad, entre otros.

Este penal se ubica a 57 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca, en el municipio de Coatlán del Río, Morelos. Fue construido en el año 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, por Homex, empresa que quebró en 2013, lo que ocasionó que a partir de ese año Grupo Ideal se hiciera cargo del inmueble.

Grupo Ideal es una empresa derivada de una escisión de Grupo Financiero Inbursa, filial de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú, con la que dicho conglomerado buscaba obtener y operar contratos y concesiones a largo plazo para desarrollar proyectos de infraestructura en América Latina.

De este modo, Grupo Ideal se convirtió en una más de las seis empresas que recibieron un bloque de contratos plurianuales celebrados entre 2010 y 2011 por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por Genaro García Luna, para la privatización de ocho penales por los que el gobierno federal pagaba 67 mil 358 millones de pesos al año, proyecto para el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos, a pagar en un periodo de 20 años a las contratadas.

Desde el 27 de octubre de 2015, el Cefereso 16 fue incorporado al sistema penitenciario federal, es decir, dejó de ser totalmente privado, pero su operación aún se encuentra a cargo ahora del fondo de inversión Capital Inbursa, también propiedad de Slim.

Proceso consultó a Grupo Carso sobre el tema, cuyos representantes explicaron que Capital Inbursa tomó el control indirecto del contrato que Homex tenía con el gobierno federal debido a que dicha empresa no pagó un crédito que le había sido otorgado por la financiera.

Para el año 2021 la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la renegociación de los ocho contratos, de los cuales sólo subsistieron dos de los proveedores originales, que firmaron desde el sexenio de Calderón, para reducir los montos 15%, con lo que el gobierno federal se comprometió a pagar 57 mil 252 millones de pesos anuales a las seis empresas firmantes.

De acuerdo con los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el penal tiene una capacidad para albergar a dos mil 528 mujeres y para diciembre de 2023 registró una población de mil 201 internas.

En mayo de 2023, la CNDH emitió una recomendación por el caso de 404 mujeres internas en este penal que desde septiembre del año anterior sufrieron una intoxicación por consumir alimentos echados a perder por el calor, a quienes se les negó la atención médica, pues en el centro no había personal médico, de enfermería ni había medicamentos suficientes.

Esta casa editorial consultó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre los suicidios de las mujeres al interior del Cefereso 16, misma que remitió a **Proceso** a la tarjeta informativa que emitió desde noviembre del año pasado.

En dicha tarjeta, la SSPC informó sobre ocho de los suicidios ocurridos entre julio y noviembre de 2023 en el penal y afirmó que la Fiscalía General del estado de Morelos está encargada de las investigaciones relacionadas con dichas muertes para determinar la causa y el deslinde de responsabilidades.

“Lamentamos el fallecimiento de estas personas y en cada uno de los casos se mantiene atención y acercamiento con las familias”, asentó la dependencia.

Fuentes ministeriales explicaron a esta reportera que, debido a que los suicidios ocurrieron dentro de un penal federal, por ley, la Fiscalía de Morelos está impedida para investigar las causas y hacer el deslinde de responsabilidades a las que aludió la SSPC en su tarjeta informativa del 9 de noviembre de 2023, por lo que los casos han sido remitidos por la institución morelense a la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero.

Internas asisten a actividades culturales

Foto: gob.mx



En tanto, la SSPC señaló también que desde los primeros suicidios registrados estableció un trabajo conjunto con la CNDH.

“Se han realizado cambios y rotación de directores y mandos en el Cefereso 16. Se ha reforzado el trabajo de prevención del suicidio, por lo que se realizan campañas de revisión para la detección y el tratamiento de casos.

“Asimismo, se han redoblado las actividades artísticas, culturales y deportivas entre la población de mujeres privadas de la libertad”.

Grupo Carso señaló a esta revista que la obligación que tiene Capital Inbursa, conforme al contrato que originalmente firmó el gobierno federal con Homex, es la de proveer al OADPRS “un conjunto de elementos físicos (incluyendo, sin limitar, el terreno y la infraestructura), materiales tecnológicos y auxiliares para que Prevención y Readaptación Social cumpla con sus funciones en materia penitenciaria, mismas que le son exclusivas e indelegablemente”.

“Los empleados, funcionarios, administradores y/o cualquiera otra persona relacionada con las empresas proveedoras del servicio, no mantienen contacto alguno con las personas privadas de la libertad (PPLs), por lo tanto, no tienen ni pueden tener conocimiento personal y/o intervención en las actividades y/o trato brindado a las y los PPLs”, señaló la empresa a través de una tarjeta informativa.

Al tratarse de un penal operado por el Estado pero propiedad de una empresa privada, las responsabilidades de una y otra parte no están del todo claras.

Rodríguez. Una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad

Foto: Gerardo Luna



Deslindó a Capital Inbursa de la prestación de servicios médicos, medicinas y/o insumos relacionados con el tratamiento de las enfermedades que padezcan las internas del Cefereso 16.

Muertes catalogadas como suicidios

De acuerdo con los datos del OADPRS y los casos documentados por el IFDP, entre 2020 y 2021 las muertes de 15 mujeres fueron catalogadas como suicidios.

De estas muertes 11 ocurrieron durante los últimos seis meses del año 2023, lo que representa un incremento inusual tomando en consideración que en el año anterior se registraron dos fallecimientos en estas condiciones y en 2020 y 2021 uno por año.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han entregado a las familias ni a los representantes legales de las mujeres que murieron en estas condiciones alguna evidencia de que tuvieran algún problema de salud mental que las llevara a quitarse la vida.

"Había muchísimas violaciones a los derechos de estas mujeres previo a los suicidios que se han venido registrando. Nosotros en CEA Justicia acompañamos 14 casos del Centro Federal 16, que tienen que ver con los traslados y tenemos más o menos bien entendido lo que está sucediendo dentro del centro, es decir, esta violación sistemática a su derecho a la salud, a la entrega de los medicamentos, los tratos que reciben dentro del centro, que claramente son tortura", comentó en entrevista para **Proceso** Ángela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia).

"Me parece impresionante por parte del Órgano Desconcentrado salir a decir con esta ligereza que estas 13 mujeres se suicidaron (entre 2022 y 2023), cuando sabemos que ni siquiera tienen un médico general de planta porque todo lo atan a un tema de salud mental, cuando en realidad ni siquiera

tienen cómo documentar que las mujeres que fallecieron tenían problemas de salud mental, porque no tienen un médico que pueda hacer ese diagnóstico. Lo que muchos de los familiares nos han comentado es que en algunos casos, de estas 13 mujeres, les parece muy extraño e inusual el suicidio, porque un día antes habían hablado con ellas. La realidad es que sabemos que eso puede pasar, que una persona se encuentre bien en la mañana y en la noche se suicide, sin embargo, sabemos que las condiciones del centro son muy propicias para tener graves problemas de salud física y mental".

La activista y especialista en derechos humanos reveló que por lo menos en tres de los últimos casos hay dudas fundadas por parte de los familiares de que no se trató de un suicidio, mientras que hay algunas familias que definitivamente ya no quieren saber más del tema.

Incorporación al sistema penitenciario

Desde el año 2021 la organización de la sociedad civil Documenta advirtió de la incorporación de este penal al sistema penitenciario como el único en el país destinado sólo para mujeres. Las autoridades comenzaron a trasladar a las internas de Nayarit y a las que se encontraban en el Cefereso Femenil Noroeste, que fue clausurado, y las del Cefereso Femenil Rehilete, que se convirtió en un centro varonil.

Estos traslados, según el "Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México", realizado por Documenta, tienen impactos negativos en los derechos de las personas privadas de su libertad.

"Al llegar a un lugar lejano a su proceso penal se afecta, por ejemplo, el derecho a una defensa adecuada y a una vida familiar. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres privadas de la libertad por un delito del fuero federal ya que, sin importar el lugar donde estén detenidas, existe el riesgo de que las trasladen a Morelos", señala el informe.

Documenta señaló en su informe sobre "Privatización del sistema penitenciario en México", realizado en 2016, que durante los primeros traslados registrados ese año las mujeres sufrieron golpes, descargas eléctricas y violencia sexual, e incluso una de ellas murió.

"Lo que estamos observando es que las mujeres están viviendo un nivel de abandono mucho mayor, pero en el último año y medio la población en el Cefereso 16 pasó de 900 a mil 300 y 90% de las mujeres que llegaron son producto de traslados, en su gran mayoría ilegales, por parte de las autoridades porque no fueron certificados con el jurídico previamente, porque las razones que dan no van acorde con las necesidades o a la situación que tenían. Muchas de ellas no tienen sentencia, la gran mayoría vienen de estados del norte y las están concentrando en este centro público privado, ¿y eso qué implica?: un abandono básicamente inmediato", precisó Ángela Guerrero.

Esta casa editorial constató que, según los cuadernos estadísticos del OADPRS, al 31 de diciembre de 2023 en el Cefereso 16 había 598 mujeres cuyos casos están en el fuero federal, 373 procesadas y 225 sentenciadas y 603 por delitos del fuero local, 131 procesadas y 472 sentenciadas.

CEA Justicia ha estimado que, para algunos familiares de mujeres originarias de Sonora, el gasto para ir a visitarlas a Morelos es de aproximadamente 17 mil pesos, mientras que el sistema penitenciario limitó las videollamadas por una filtración a medios de comunicación de una de estas videollamadas, por lo que, prácticamente, las internas permanecen en aislamiento.

"Es un aislamiento por parte del Estado a las más de mil 300 mujeres que se encuentran en este espacio", agregó la coordinadora de la organización.

La activista consideró que el hecho de que el Cefereso 16 sea el único penal federal femenino no significa que sea necesaria la construcción de otro centro de características similares, sino que lo que se exige de las autoridades es que regresen a las mujeres a sus lugares de origen para evitar incluso retrasos innecesarios en sus procesos penales, mismos que padecen por no estar ni siquiera en la misma entidad en la que se encuentran sus abogados.

Sin embargo, las autoridades han argumentado que no tienen convenios de colaboración con las entidades federa-

tivas para poder regresar a sus lugares de origen a las mujeres que fueron trasladadas a Morelos.

Guerrero detalló que las solitudes de regreso también han sido dificultadas porque en muchos casos luego de viajes que han llegado a superar las 30 horas les dan a firmar las cartas con las que certifican que el

traslado fue legal y no se dan cuenta sino hasta que inician el trámite para solicitar su retorno.

"Los suicidios son un riesgo latente porque no han cambiado las condiciones del centro. Después de estos 13 suicidios por los que la CNDH emitió una recomendación no hubo ningún cambio drástico, solamente cambiaron a la directora, por cuarta vez en dos años, pero no hay un diagnóstico de fondo para entender cuáles son las problemáticas en términos de salud mental; establecer un programa de psicología permanente, no jornadas; hay medicamentos que no han sido abastecidos; no hay doctor de planta; no hay ginecóloga de planta; las mujeres solamente pueden enfermarse en ciertos horarios y ciertos días de la semana. Por supuesto, existe el riesgo de que esto vuelva a suceder", dijo.

En febrero pasado CEA Justicia solicitó a instancias internacionales la emisión de medidas cautelares para proteger a las mujeres del Cefereso 16.

Actos de tortura

Para el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que representaba legalmente a tres de las mujeres que fallecieron en el último año, las condiciones en las que viven las internas del Cefereso 16 constituyen actos de tortura que pueden ser el origen, por lo menos, de las últimas 13 muertes de internas.

Gertz Manero. Las investigaciones, en la FGR

Foto: Octavio Gómez



En entrevista con **Proceso**, Ruth Zenteno, de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (ULEDH), y Sofía Robina, titular de la Secretaría Técnica de combate a la Tortura, ambas del IFDP, detallaron la estrategia que realiza la institución en busca de que la justicia federal reconozca las omisiones cometidas en el Cefereso 16 como actos de tortura atribuibles al Estado mexicano.

"Encontramos una serie de omisiones latente, desde falta de medicamentos, de atención especializada; las veían médicos generales; a algunas les recetaron estudios y no se los realizaron", detalló Sofía Robina.

"Las estrategias que hemos implementado han sido argumentar que las condiciones en las que están ahorita las mujeres de omisiones en materia de salud no sólo son violaciones en materia de derecho a la salud, sino que constituyen tortura".

A raíz de los suicidios el IFDP se enfocó en documentar las omisiones en materia de salud mental de 58 casos de mujeres representadas por el instituto en las que las mujeres del penal no recibieron atención, medicinas o no les fueron realizados estudios ni un seguimiento a sus padecimientos.

Sofía Robina comentó que el lugar, físicamente, refleja una ausencia de vida total, pues al interior no hay ni siquiera una planta, las mujeres están rodeadas sólo de cemento, lo que hace la estancia de las mujeres más desoladora.

Añadió que en el lugar tienen muy pocas actividades para mantener ocupadas a las internas y la única posibilidad laboral es una fábrica textil.

"Claramente hay un tema de omisión de salud y todo un contexto que agrava los hechos, mucho abandono, aislamiento, prácticas supercontroladas, toda esta serie de factores genera un entorno que facilita estas muertes que han nombrado suicidios", señaló.

En diciembre el IFDP presentó dos amparos para solicitar atención médica focalizada para las 58 mujeres cuyos casos fueron documentados por los defensores públicos argumentando que estas omisiones constituyen actos de tortura en agravio de las internas.

En ambas demandas les fue concedida la suspensión de plano, pero esta sólo implicó la realización de jornadas médicas sin un seguimiento adecuado.

“Los padecimientos que encontramos fueron temas desde dolores de músculo esqueléticos; padecimientos psiquiátricos como ansiedad, depresión, insomnio, trastorno de estrés postraumático; alteraciones de presión: hipertensión, hipotensión; asma, epilepsia, esos son los más comunes, pero también hemos documentado otros casos con problemas crónicos en los que las mujeres los padecían desde antes, ya estaba documentado qué tratamiento debían llevar, pero no se les proporcionó”, señaló Sofía Robina.

La funcionaria consideró que el esquema público privado que tiene el Cefereso 16 ha propiciado que la responsabilidad de las autoridades y la empresa de Carlos Slim no esté del todo clara.

“Al final esto ha generado que se echen la bolita cada vez que pueden y que las autoridades muchas veces argumenten que eso le toca a la empresa y que no pueden hacer nada”, afirmó.

Ruth Zenteno explicó que, por ello, en los amparos han señalado que existe una corresponsabilidad de autoridades federales y Capital Inbursa, pues los servicios que provee la empresa privada debe ser supervisada por el Estado para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres que viven en el penal.

Agregó que el OADPRS tiene un convenio con el IMSS, pero hasta noviembre del año pasado no contaba con los anexos técnicos que son los que van a definir la operación que realizará el instituto para prestar los servicios de salud al interior del Cefereso.

“Lo que establece el convenio marco es que para establecer específicamente cómo se llevarán a cabo los servicios se realizarán convenios específicos o anexos técnicos, pero hasta noviembre del año pasado no existían éstos”, señaló.

Sofía Robina detalló que en las brigadas que ha realizado el IFDP han documentado casos en los que las mujeres han estado en sujeción forzada, lo que implica un incumplimiento en los estándares mínimos que deben acatar las autoridades penitenciarias, si es que estas medidas se aplicaron como parte de un tema médico.

“No hay constancias de consentimiento informado, las amarran de cuatro puntos a las camas y se excede por mucho las horas en las que esto está permitido por algunos instrumentos médicos”, detalló.

Ruth Zenteno indicó que todas estas acciones agravan la situación de por sí difícil que viven las mujeres y pueden derivar en que los incidentes de crisis se presenten más seguido y las autoridades del penal no tienen mecanismos de contención adecuados para hacer frente a estos episodios.

Los relatos sobre los aparentes suicidios también evidencian el contexto de desatención en el que viven las mujeres dentro del penal de Morelos.

Una de estas mujeres, procesada por un delito local pero trasladada al penal federal, intentó suicidarse en

el año 2022 y cuando las custodias se percataron de esto acudieron para quitarla de la horca en la que se encontraba.

De acuerdo con las custodias, la mujer intentó defenderse para evitar que frustraran su intento de suicidio y golpeó a algunas de las funcionarias, quienes posteriormente denunciaron a la interna por el delito de lesiones.

Fue así como el IFDP conoció su historia, pues al tratarse de un delito cometido en un penal federal, era un ilícito de este fuero.

“Este caso es uno de los más crudos para mostrar la perspectiva, porque antes de buscar otro tipo de atención que pueda dar cuenta de la situación en la que se encontraba esta mujer, de dar una atención psicológica o, en su caso, la psiquiátrica necesaria para generar un entorno de garantía de sus derechos, lo que se hizo fue iniciar un proceso en su contra. Entonces me parece representativo de cómo se atiende muchas veces a las mujeres, siempre priorizando un esquema de seguridad que pone en el centro más a las custodias que a las mujeres”, detalló Sofía Robina.

En noviembre de 2022, otra de las internas que murieron ya había obtenido una orden para que le dieran medicamentos, pero decidió quitarse la vida 15 días después de que se emitió dicho mandamiento, pues ella seguía sin recibir sus medicinas. Otra mujer que murió apenas estaba en proceso penal en curso y acababa de solicitar el cambio de su medida cautelar.

“Los tres casos reflejan muy claramente por qué cuando hablamos de responsabilidad de las autoridades penitenciarias la respuesta es muy obvia, al estar las mujeres bajo su custodia, porque son mujeres que dependen por completo del Estado y el Estado es responsable, por tanto, de sus vidas y de su integridad”, finalizó Robina. 📍



COZUMEL, el nuevo objeto del deseo del narco

Cuna del poder político de Quintana Roo, Cozumel comienza a enfrentarse a una inédita escalada de violencia desde que en 2021 arribaron a la segunda isla más poblada de México integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en busca del control de la venta de droga que pelean –asesinatos de por medio– a organizaciones criminales locales. Líder mundial en recepción de cruceros, este territorio insular también destacada por ser punto de recepción de paquetes de drogas que llegan de Centro y Sudamérica.



OCTAVIO MARTÍNEZ

COZUMEL, Q. Roo.— Cozumel, líder en recepción de cruceros a escala mundial y la segunda isla más poblada de México, padece una batalla entre grupos del crimen organizado que buscan imponer su mando en la distribución de droga, misma que ha dejado un aumento significativo de homicidios como nunca en su historia.

La cuna del poder político en Quintana Roo ha sentido la llegada de integrantes del crimen organizado, principalmente de quienes se identifican con

el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales comenzaron desde meses atrás una embestida contra las organizaciones criminales locales que han mantenido el control del trasiego de la droga que aquí se realiza.

En casi tres años, este lugar ha pasado de ser una pacífica isla, con el primer lugar mundial de atraque de cruceros, a un sitio donde los delitos que atentan contra la vida se han vuelto comunes.

La actividad turística en la isla refleja datos impresionantes: sólo en 2023 recibió poco más de cuatro millones de pasajeros en mil 156 cruceros, de acuerdo con datos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

Mientras tanto, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta que la tasa de homicidios aumentó a partir de 2021. Antes, el promedio de estos casos era de una a dos muertes al año.

Desde hace casi tres años los asesinatos no han dejado de aumentar. En 2022 ocurrieron 14, en 2023 fueron 15, mientras que en lo que va de 2024 suman cinco casos para una población de alrededor de 88 mil habitantes.

Es decir, en lo que va de la actual administración municipal han ocurrido 36 homicidios, tomando en cuenta los tres últimos meses de 2021.

Aunque estas cifras distan de las que se registran en otros estados del país, la tendencia al alza causa inquietud en la isla, pues apunta a convertirse en un lugar con la misma situación que impera en los otros destinos turísticos del Caribe Mexicano, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde los homicidios por el tráfico de drogas no cesan y ya han dejado daños colaterales entre la población y turistas.

Cuna de gobernadores

Desde hace casi dos décadas la entidad no dejaba de tener un gobernador cozumeleño, el grupo de poder enraizado desde épocas posteriores al México independiente. De los nueve gobernadores que ha tenido Quintana Roo, cinco han sido cozumeleños.

Si bien el exgobernador y ahora embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, nació en Mérida, Yucatán, su vida se relaciona estrechamente con la isla.

Han sido gobernadores cozumeleños Pedro Joaquín Coldwell, de 1981 a 1987, quien posteriormente fue secretario de Energía de Enrique Peña Nieto; Miguel Borge Martí, de 1987 a 1993, y Félix González Canto, de 2005 a 2011.

De igual manera Roberto Borge Angulo (de 2011 al 2016) es de la isla. Actualmente se encuentra privado de su libertad en una cárcel de Morelos por un proceso penal iniciado en su contra por delitos de la función pública y crimen organizado.

Todos esos exmandatarios emanaron del PRI. Pero en 2022 la morenista Mara Lezama Espinosa asumió la titularidad del Ejecutivo estatal. Con ella por primera vez en 48 años el PRI dejó de ser el partido gobernante en la entidad.

En Cozumel el gobierno local recae por primera vez en Morena con la alcaldesa Juanita Obdulía Alonso Marrufo, quien antes fue militante priista.

Es en este contexto cuando ocurre el alza de homicidios en la isla.

Recepción de paquetes

Los testimonios de altos mandos policiacos y de personas arrai-gadas en la isla que hablaron con **Proceso** –bajo la condición de reservar su identidad por seguridad– expusieron que desde 2022 se inició la irrupción de presuntos miembros del CJNG, quienes comenzaron a pelear la plaza con los locales: pequeñas células que desde siempre habían sido los principales distribuidores de la droga.

“Llegaron y comenzaron a pelearse con ‘los narquitos’, como nosotros les decimos; entonces fue cuando comenzó el verdadero terror porque los locales nunca se metieron con la población, aunque son bien sanguinarios también”, dice un habitante que habla sobre el ambiente que ahora se vive en la isla.

La situación geográfica de Cozumel también es propicia para la distribución de sustancias prohibidas. Sus más de 48 kilómetros de costa son proclives para el recalde de sustancias de este tipo en la parte oriental de su territorio, donde constantemente llegan paquetes, principalmente de cocaína que grupos criminales tiran al mar procedentes de Centro y Sudamérica. Se trata de la parte poco habitada de la isla, cuya población se concentra en el poniente, donde se ubican los muelles que conectan con la parte continental vía Playa del Carmen.

Datos de la Secretaría de Marina Armada de México indican un promedio de dos incautaciones mensuales de droga en la parte oriental de la isla. Como ejemplo de ello, en los 8, 10, 11 y 18 de marzo últimos fueron asegurados paquetes de cocaína en esa zona del territorio, aunque no precisan las cantidades.

Los testimonios aseguran que por un paquete que se logra asegurar, dos más caen en las manos de los distribuidores.



En Cozumel son vendidas las grapas a precios exorbitantes a los miles de turistas que a diario arriban y, en muchos casos, llegan en los diversos cruceros que cotidianamente atracan, agregaron las fuentes consultadas.

Por ejemplo, en el caso de la marihuana, se pudo conocer que mientras en puntos de Tulum se cotiza en 500 pesos la dosis, en Cozumel se puede comprar en mil 500 pesos.



Es esta comercialización la que detonó la lucha entre los grupos criminales, exponen los testimonios. Afirman que cuando los integrantes del CJNG arribaron a la isla comenzaron a hostigar a los grupos locales, los cuales presuntamente habían sido protegidos por mandos policiacos. Es entonces cuando los homicidios se dispararon... y las denuncias por detenciones arbitrarias también.

Abusos de autoridad

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo registra en Cozumel un incremento de quejas por actos de autoridad relacionados con detenciones.

Manifestación contra las autoridades de la isla
Foto: Gustavo Villegas Betanzos



“En lo que va del año llevamos 24 quejas; de esas, seis son contra policías municipales. Es principalmente por detención arbitraria. El año pasado fueron 98 quejas”, explica Ángel Salvador Contreras Mis, tercer visitador de Derechos Humanos de Quintana Roo.

El 4 de marzo último la Fiscalía estatal aplicó una redada contra presuntos grupos del crimen organizado. Fueron 12 cateos practicados en domicilios de la isla que dejaron un saldo de 16 detenidos y el presunto aseguramiento de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero también hubo quejas de algunos afectados por el presunto robo de pertenencias en estos operativos.

Pero hasta ahora la Fiscalía no ha dado más detalles ni ha informado sobre la situación procesal de los detenidos, tampoco sobre si se investigaron las quejas por los supuestos robos.

Acoso a medios

En la actual administración a cargo de Juanita Alonso Marrufo, la policía también es señalada como responsable de hostigar a un sector de medios de comunicación que realizan la cobertura diaria de los hechos delictivos.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado también tiene en sus manos quejas por violaciones al derecho a la libertad de expresión y del acceso a la justicia, interpuestas por periodistas locales que señalan un clima de acoso por parte de las autoridades municipales y corporaciones de seguridad en la isla.

El tercer visitador Óscar Salvador Contreras informó que actualmente cuenta por lo menos con un expediente abierto por este motivo, mismo que se encuentra en la instancia final para emitir el resolutive rumbo a la recomendación.

"Actualmente está en el análisis de la determinación final (...) La instancia señalada como responsable es la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel. Nosotros ya hicimos la determinación que se está revisando en Chetumal, acabamos el proceso de investigación y ahora está en proceso de análisis en la Dirección de Recomendaciones de la Comisión", agrega el tercer visitador.

Pero ese no es el único caso en el que ha intervenido la comisión. En septiembre de 2022 el reportero Francisco Díaz fue agredido y llevado detenido por la policía estatal cuando grababa una ejecución en el colegio Partenón de Cozumel, el cual se convirtió en el primer homicidio doloso en el sexenio de Mara Lezama.

Esos casos violatorios de derechos humanos quedaron archivados sin un esclarecimiento puntual.

Además, destacan las amenazas que sufrió el periodista Gustavo Villegas Betanzos, junto con siete reporteros más. Se presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía local, que sólo integró la carpeta de investigación, con terminación 10/1337/2022, el cual hasta ahora no ha tenido avances.

Estas amenazas, recuerda Villegas Betanzos, fueron hechas con una manta para un total de ocho reporteros, el 1 de octubre de 2022, justo la noche en que un vehículo del periódico *Por Esto*, estacionado en el exterior de la corresponsalia en la isla, fue incendiado con una bomba molotov por presuntos integrantes del crimen organizado.

El 8 de octubre de ese año reporteros arropados por la sociedad civil marcharon exigiendo paz a las autoridades. Las protestas continuaron semanas después.

Este reportero buscó la versión del gobierno municipal de Cozumel, de Quintana Roo y de la Fiscalía General del Estado. Hasta el cierre de esta edición no habían respondido. ■

Instituto Cultural de León

fenal 35

Feria Nacional del Libro de León

Del 17 al 26 de mayo

En Poliforum León

Entrada libre

Blvd. Adolfo López Mateos esquina Boulevard Francisco Villa s/n, Oriental.
León, Guanajuato

Primera Plus FERIA AMARCA fenal Instituto Cultural de León LEÓN

El correísmo se asienta en México de la mano de AMLO

No obstante que algunos tienen abiertos procesos penales y sentencias por corrupción, colaboradores cercanos de Rafael Correa, exgobernante de Ecuador, han encontrado refugio político en México, donde algunos ya trabajan en el gobierno. Correa, refugiado en Bélgica, es un visitante frecuente de nuestro país. El exvicepresidente Jorge Glas fue el último en pedir ayuda, pero fue detenido antes de que pudiera viajar a México, lo cual desató un escándalo diplomático.



Correa. Entrada libre a México

Foto: Moisés Pablo /Cuartoscuro

DALILA ESCOBAR*

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador México se ha convertido en el refugio de varios dirigentes del izquierdista partido Revolución Ciudadana de Ecuador, del exgobernante Rafael Correa, incluso de aquellos que enfrentan procesos penales y sentencias por casos de corrupción.

El mismo Correa tiene una sentencia de ocho años de cárcel en su país por un polémico caso de corrupción y está refugiado en Bélgica, pero viaja con frecuencia a México para reunirse con sus excolaboradores.

A ellos buscaba sumarse el exvicepresidente Jorge Glas, un político muy cercano a Correa que se había refugiado en la Embajada de México en Quito el 17 de diciembre pasado. El 5 de abril anterior, el gobierno mexicano le concedió asilo político y esa misma noche la policía ecuatoriana allanó, mediante un operativo armado, la sede diplomática para detener al político correísta, lo cual llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.

Para el expresidente Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, Glas era una piedra en el zapato de su sucesor, Lenín Moreno, un excorreísta que desató una persecución contra varios de sus antiguos compañeros de partido y que involucró a la justicia en esa disputa política.

De acuerdo con el exmandatario, él y sus excolaboradores son víctimas de persecución con un "gran nivel de maldad", y por eso "la dirigencia histórica (de Revolución Ciudadana), mucha, está en México".

En ese sentido, "no alcanzarán tres vidas para agradecer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por toda su apertura y apoyo".

Correa habló así durante la presentación de una edición más de la revista *Propuestas para el desarrollo* en la UNAM, casi un mes antes de la crisis diplomática entre México y Ecuador de principios de abril pasado, la cual se originó con las declaraciones del Ejecutivo mexicano sobre las elecciones presidenciales en Ecuador de 2023.

La pelea con Lenín

La llegada de López Obrador a la Presidencia de México, en diciembre de 2018, fue una buena noticia para el correísmo, que ya vivía una abierta confrontación con el presidente Lenín Moreno (2017-2021).

En medio de las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, las cuales fueron convocadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Moreno acusó a correístas, como el excanciller Ricardo Patiño, de instigar las movilizaciones que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron reprimidas con "uso excesivo de la fuerza" por parte del gobierno.

En esa coyuntura se refugiaron en la Embajada de México en Quito varios copartidarios de Correa: la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira (y su esposo Luis Flores); los asambleístas Soledad Buendía (y su esposo Edwin Jarrín) y Carlos Viteri (y su esposa Tania Pauker), así como el abogado Luis Fernando Molina.

El 9 de enero de 2020, esos siete correístas viajaron a México como refugiados políticos. Luego llegaron al país el excanciller Ricardo Patiño y el exsecretario de Educación Superior, René Ramírez, que recibieron el mismo estatus.

Algunos se han empleado o recibido contratos de la administración lopezobradorista. Es el caso de Ismael Tovar, quien primero manejó redes sociales desde Palacio Nacional y ahora se mantiene en el gobierno de la Ciudad de México de Martí Batres, donde percibe un salario bruto de 104 mil 740 pesos al mes.

El 9 de octubre de 2019, en el marco de las protestas sociales contra el gobierno de Lenin Moreno, la Cancillería mexicana expresó su preocupación "por el desarrollo de los graves sucesos que han tenido lugar en Ecuador" e hizo un llamado "a respetar el Estado de derecho y los derechos humanos".

Además, condenó "tajantemente toda forma de violencia" y reiteró su compromiso "con el derecho a la libre manifestación y rechaza el uso de la fuerza desmedida por parte del Estado".

En ese mismo comunicado, casi al final, el gobierno de López Obrador expresó "su preocupación por la criminalización de actores de oposición, ya que esto no abona en la solución del conflicto".

El presidente Moreno permitió la salida de Ecuador de los correístas refugiados en la embajada mexicana a pesar de que en algunos casos, como el de Rivadeneira, enfrentaban investigaciones de corrupción que ellos catalogaban como parte de una persecución política.

Otros correístas exiliados en México son la exlegisladora Sofía Espín y el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.

El doctor en ciencia política Santiago Basave dice a **Proceso** que las frecuentes acusaciones

El ataque de Ecuador a la Embajada de México en Quito.

Foto: David Bustillos /AP photo

contra la Fiscalía por su supuesto sesgo anticorreísta tienen sustento.

"Los procesos judiciales contra el correísmo van más rápido", asegura el profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador.

Y señala que "también hay presiones a la justicia, claro que hay presiones políticas de todos los gobiernos".

El quiebre

El rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se produjo tras una escalada de agravios por parte de los dos gobiernos.

Sin que nadie le preguntara, durante la conferencia matutina del pasado 3 de abril, el presidente López Obrador expuso su interpretación de lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de Ecuador el año pasado, en las que se enfrentaron, entre varios otros candidatos, la correísta Luisa González y el empresario derechista Daniel Noboa.

"Hubo elecciones en Ecuador —dijo López Obrador—, iba la candidata de las fuerzas progresistas (Luisa González) como 10 puntos arriba. Como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que había mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado (Fernando Villavicencio), y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo (supuestamente Daniel Noboa) sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense a todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue".

Al final, opinó que en ese país "no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento".

Los datos de López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas son incorrectos, ya que el apoyo a González en los sondeos de opinión no se modificó tras el asesinato de Villavicencio, e incluso en la primera

Canseco, jefe de Cancillería en México en Ecuador, sometido por la policía local.

Foto: Especial





vuelta electoral, realizada 11 días después del magnicidio, la candidata obtuvo 33.61% de los votos, 10 puntos más que Daniel Noboa, quien ganó la segunda vuelta con 51.83% de los sufragios.

En la segunda vuelta, realizada el 15 de octubre de 2023, González se quedó con 48.17% de los votos, un poco más del porcentaje que ha mantenido el correísta partido Revolución Ciudadana en otros comicios presidenciales desde que es oposición.

Políticos ecuatorianos acusaron al presidente mexicano de banalizar un magnicidio que aún mantiene en luto al país.

En una entrevista con esta revista, Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, lamentó la declaración de López Obrador y aseguró que "las fuerzas progresistas que tanto defiende están vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, son sospechosos oficialmente de participar como autores intelectuales del horrendo crimen, causando un profundo impacto en la democracia del país", por lo que exigió al presidente respeto y silencio y afirmó que no tenía calidad moral.

Cabañas en la Sierra Gorda | Q

Lo encontré.
Conoce más en:
queretaro.travel

San Joaquín
Cabañas Xakali

SECRETARÍA DE TURISMO
QUERÉTARO
Y ENTONCES, ENCONTRE MÉXICO.

Este programa es público, tanto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"No se meta con Ecuador y atienda la violencia en México", le dijo.

El 4 de abril, un día después de las declaraciones del presidente, el gobierno de Noboa declaró persona *non grata* a la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur. México respondió el 5 de abril otorgando el asilo político a

Apenas este 6 y 7 de marzo, antes de la crisis bilateral, Correa estuvo en México para participar en un evento con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, en Los Pinos.

El funcionario mexicano dijo que abordaron temas de la libertad de expresión y el derecho a la información que, sostuvo, "son pilares de la democracia y están amenazadas por la desinformación de monopolios mediáticos de poderes políticos y económicos".

Después, Correa estuvo en la presentación de un número de una revista en Ciudad Universitaria.

En su ponencia destacó: "Desde 2017 (cuando dejó el poder tras una década de mandato) estamos brutalmente perseguidos, yo no puedo volver a mi país, yo tengo una condena de ocho años por 'influjo psíquico'; aunque no lo crean se los puedo

Los datos de López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas son incorrectos, ya que el apoyo a González en los sondeos de opinión no se modificó tras el asesinato de Villavicencio, e incluso en la primera vuelta electoral, realizada 11 días después del magnicidio, la candidata obtuvo 33.61% de los votos, 10 puntos más que Daniel Noboa, quien ganó la segunda vuelta con 51.83% de los sufragios.

Glas y, horas después, la policía ecuatoriana el ingresó a la sede diplomática para la detener al exvicepresidente.

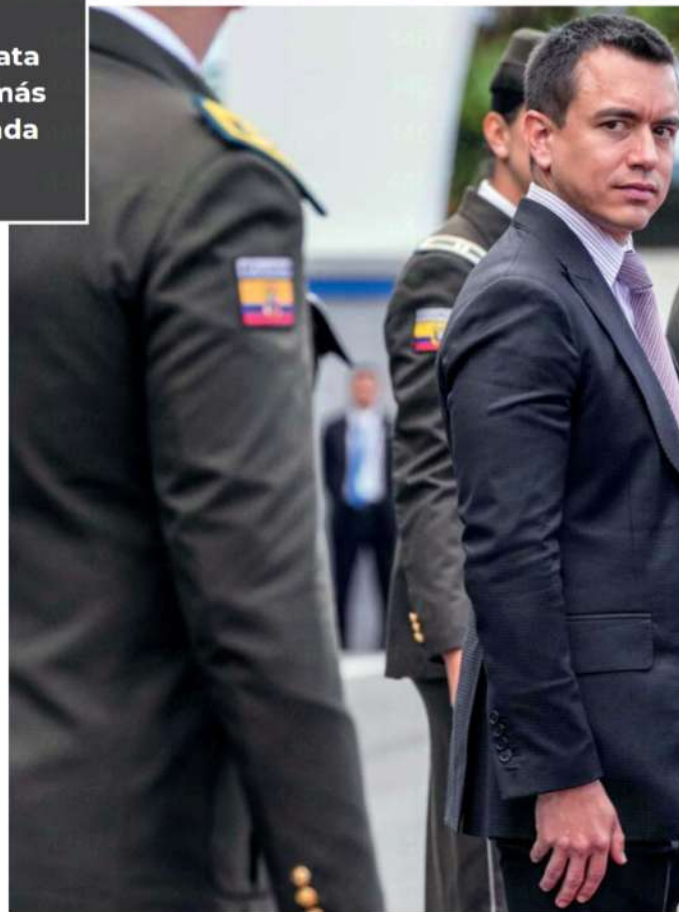
México rompió relaciones con Ecuador y presentó una demanda contra ese país ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto en su Embajada.

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el hecho con 29 votos en favor, uno en contra (el de Ecuador) y la abstención de El Salvador.

La bancada legislativa de Revolución Ciudadana, el partido de Correa, que es mayoritaria en la Asamblea Nacional, rompió de inmediato con Noboa, a quien le había ayudado a sacar algunas leyes adelante, y se declaró en oposición, lo que afectará la gobernabilidad del mandatario ecuatoriano.

Visitante frecuente

Correa es también huésped frecuente de México con visitas a la Universidad Nacional Autónoma de México a invitación de John Ackerman.



mandar, nadie lo cree, dizque por dirigir una organización criminal dedicada a los sobornos. Nunca ha habido soborno y como ni así tenían pruebas contra mí, con todos los montajes que hicieron dijeron que fue por 'influjo psíquico' eso lo sacaron en plena pandemia".

Además, dijo que esta acusación, en 2020, fue en tiempo récord, porque se hizo horas antes que se inscribiera como candidato a la vicepresidencia y pudiera regresar a su país.

En su visita a México también dijo que en Ecuador les han robado el partido político (el original era Alianza País) y que toda la dirigencia está exiliada. Buscaron contender con partido prestado y, aun así, se sigue considerando la fuerza política más grande del país, ahora como Revolución Ciudadana.

El mensaje desde su condición de asilado, para no pisar la cárcel en su país, es que sus detractores "deberían explicar cómo es que no nos han exterminado".


De acuerdo con Correa, "no tendríamos que explicar por qué no ganamos la presidencia; ellos tienen que explicar por qué no nos han podido aniquilar, y no nos van a aniquilar, los vamos a vencer. Lamentablemente el daño ya está hecho".

En sus declaraciones ante estudiantes en Ciudad Universitaria, el pasado 7 de marzo, Correa se refirió al mismo hecho que López Obrador abordó el 3 de abril y que acabó por detonar la actual crisis diplomática bilateral.

"Estuvimos dos veces a punto de ganarles la presidencia de la República. En 2021 perdimos por nuestros propios errores. En el 2023 íbamos a ganar en una sola vuelta con el 42 por ciento, de acuerdo al sistema electoral ecuatoriano: si en la primera vuelta saca más del 40% y más de 10 puntos de diferencia al que le sigue, gana en una sola vuelta. Asesinaron a un candidato opositor a nosotros (Fernando Villavicencio), nos culparon, bajaron los puntos, nos llevaron a esa segunda vuelta con un niño rico, hijo del hombre más rico del país al que yo derroté en 2006, y todos se unen contra nosotros en la segunda vuelta y más la prensa (...) Ni aún así podían... tal vez íbamos a ganar, asesinaron a siete de ocho sicarios que participaron en ese asesinato y nos volvieron a culpar".

En la que para Correa es la peor persecución que se ha registrado en América Latina, considera que si no logra un escenario en el que pueda regresar a su país, será complicado ganar alguna elección. Asegura que tiene las manos limpias y "sé la responsabilidad que tengo, y por eso ya mi vida no es mía".

Noboa obtuvo una victoria con sabor amargo en la consulta popular y el referendo realizados el pasado 21 de abril pues, aunque los votantes dijeron "Sí" a nueve preguntas orientadas a reforzar la lucha contra el crimen —como incorporar a las Fuerzas Armadas a ese combate y autorizar la extradición de ecuatorianos—, le rechazaron dos relativas a las llamadas reformas neoliberales que busca emprender el gobernante.

"Es un presidente popular y el asalto a la Embajada mexicana no parece haberle afectado su imagen, pero los votantes le pusieron límites a su modelo; aprueban la mano dura contra las bandas del narcotráfico, pero no están de acuerdo con las reformas neoliberales a favor de los inversionistas", dice la maestra en estudios latinoamericanos María Fernanda Zuluaga. 

*Con información de Rafael Croda



Noboa. Agresión a México

Foto: Dolores Ochoa/AP photo

Deportados por ser colombianos

Visitantes colombianos relatan que se les retiene hasta 72 horas en instalaciones insalubres, donde reciben tratos crueles y degradantes por parte del Instituto Nacional de Migración. Este comportamiento es sistemático, afirman ONG y perjudicados, sin que haya bases para ello, pues la mayoría tiene su documentación migratoria en orden. La "inaceptación" de colombianos en México se ha duplicado en los últimos dos años; sólo en marzo pasado fueron regresados cada día a Colombia 446 personas en promedio.

Irregularidades en
"cuarto de rechazo".
Foto: Montserrat López

T2 Aeropuerto Intern

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- Un video de la actriz y activista Cony Camelo puso de nuevo en la mira de la opinión pública de este país los malos tratos y vejaciones que sufren los visitantes colombianos en México por parte de agentes migratorios. Las noticias sobre esos abusos son recurrentes desde hace varios años.

En dos videos que se hicieron virales en los primeros días de abril, la actriz colombiana denunció que, en un vuelo de Avianca que viajaba de México a Colombia, en el que ella era pasajera, se encontró con 30 compatriotas que estaban siendo devueltos a su país por funcionarios de Migración "sin ninguna razón", luego de



mantenerlos retenidos, incomunicados y durmiendo en el piso durante varias horas o días enteros, en muchos casos con sus niños.

Una sobrecarga de la aerolínea le contó a Camelo que, recientemente, una colombiana "inadmitida" había sufrido "un aborto" luego de que los agentes migratorios mexicanos la deja-

ron sin comer durante dos días en el llamado "cuarto de rechazo" del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El video en el cual la actriz contó todo esto alcanzó más de 2.2 millones de reproducciones.

Las denuncias de los miles de colombianos "inadmitidos" en México, que pueden pasar hasta 48 y 72 horas "retenidos" en instalaciones insalubres, incluyen

Exigen a Petro reclamo energético ante AMLO

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- Frente al inusual repunte de abusos e "inadmisiones" migratorias de visitantes colombianos en México, el presidente Gustavo Petro ha sido, más que prudente, omisivo.

El mandatario, que suele ser muy enfático y activo en redes sociales cuando se trata de defender los intereses de Colombia, ha tomado distancia del tema de los recurrentes maltratos de agentes migratorios mexicanos a los turistas de Colombia que viajan a México a disfrutar de las playas de Cancún o de la arquitectura colonial del Centro Histórico de la capital mexicana.

En el primer trimestre de este año han sido "inadmitidos" y devueltos a su país 13 mil 839 colombianos que llegaron a México para hacer turismo, una cifra superior en 41.3 por ciento a la registrada en el mismo periodo de 2022 y mayor en 81.5 por ciento a la de 2021. Las denuncias de abusos también se han multiplicado (ver nota principal).

Lo más que ha dicho Petro sobre el tema es que en México "no tratan bien a los colombianos" porque las autoridades mexicanas "creen que van a cruzar el Río Bravo" hacia Estados Unidos.

Pero nunca ha criticado a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México que abusan de sus compatriotas en diferentes aeropuertos, donde según denuncias

los dejan incomunicados hasta por varios días en cuartos insalubres y les roban sus pertenencias antes de deportarlos, aunque cumplan todos los requisitos para ingresar a ese país.

Entre la opinión pública colombiana circulan videos del trato denigrante y eso genera indignación entre miles de colombianos, pero Petro ha dejado que su embajador en México, Moisés Ninco Daza, se encargue de abordar el tema con las autoridades mexicanas.

Cientos de ciudadanos y políticos, incluso de su propia coalición, el Pacto Histórico, le piden al mandatario ser contundente con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene una fuerte afinidad política e ideológica, y pedirle que haga algo para impedir que sigan las vejaciones contra los colombianos que vuelan a la Ciudad de México, Cancún y Guadalajara.

La experta colombiana en comunicación digital Rosa Cristina Parra Lozano afirmó en la red X que Petro "ha sido omiso respecto a las violaciones a derechos humanos que sistemáticamente viene cometiendo el @GobiernoMX y que se han agudizado en este sexenio exponencialmente".

La congresista del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, dice que el gobierno de Colombia debe ser "ser muchísimo más contundente" frente a López Obrador

y pedirle "que nos pare bolas (que nos haga caso) y haga algo para parar esto".

La cifra de colombianos "inadmitidos" en México, dice la hija del asesinado excomandante de la guerrilla del M19, Carlos Pizarro, "es escandalosa": 76 mil 716 entre 2022, 2023 y el primer trimestre de este año, dos mil 841 cada mes en promedio.

El doctor en ciencias políticas de la Universidad de Toulouse, Mauricio Jaramillo Jassir, dice a **Proceso** que Petro, precisamente por la cercanía que tiene con López Obrador, prefiere tratar los temas complejos —como los abusos a los colombianos que visitan México— de manera discreta, "en corto".



tratos xenofóbicos, homofóbicos, misóginos y racistas de parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM); falta de comida y agua potable; despojo de sus celulares y sus pasaportes y falta de información sobre las causas de su detención.

De acuerdo con testimonios recabados por **Proceso**, no se trata de casos aislados sino de un comporta-

miento sistemático que revela deficiencias en la capacitación del personal del INM, el menosprecio de muchos agentes por derechos humanos básicos y una generalizada convicción de que los atropellos que cometan contra los visitantes colombianos quedarán en la impunidad.

El profesor de la Universidad del Rosario señala que "Petro sabe que detrás de eso (el duro trato migratorio a los colombianos) hay un compromiso de López Obrador con Estados Unidos (para contener a los migrantes centro y sudamericanos) y que es mucho más efectivo activar canales diplomáticos y no tratar este problema, que es de vieja data, de manera mediática".

De acuerdo con Jaramillo Jassir, el embajador colombiano en México, Moisés Ninco Daza, ha sido muy insistente en tratar el tema de los abusos de manera directa con la Cancillería mexicana y el INM, en el marco de la excelente relación política que existe entre los dos países.

Y a Petro le puede parecer que esta discreta gestión puede producir mejores resultados, asegura el politólogo y maestro en geopolítica por la Universidad de París VIII.

Cumbre migratoria

Petro visitará México en junio próximo para participar en una cumbre regional sobre migración convocada por López Obrador, quien al principio de su gobierno, en 2018, abogó por enfrentar el tema migratorio con un enfoque humanitario, pero quien ante las presiones de Estados Unidos para contener los altos flujos de centroamericanos hacia el país del norte optó por levantar un "cerco" migratorio en el territorio mexicano con cerca de 50 mil elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

Con la migración como tema electoral en Estados Unidos, López Obrador ha sido susceptible a las presiones tanto de los duros republicanos encabezados por el expresidente y precandidato Donald Trump, como del gobierno del demócrata Joe Biden, quien aspira a su reelección en los comicios del 5 de noviembre próximo.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de migrantes en situación irregular que salen, llegan, transitan y permanecen en México alcanzó niveles nunca antes vistos en 2023, con 782 mil 176 "eventos" (detencio-

nes) de indocumentados, 77% más que 2023 y nueve veces por arriba de la cifra de 2020 (82 mil 379).

Los "eventos" de 2023 involucraron mayoritariamente a migrantes de Venezuela (29%) y de Honduras, Guatemala, Ecuador, Haití y Cuba (43% en conjunto).

Aun con esa política migratoria, que llevó a México a detener a 89 migrantes indocumentados cada hora en promedio el año pasado, López Obrador impulsará en la cumbre regional sobre migración, en junio próximo, una declaración conjunta que enfatizará la necesidad de atacar las causas del fenómeno —la falta de oportunidades— en los países latinoamericanos.

México es el país que más migrantes genera hacia Estados Unidos, según las estadísticas de detención de indocumentados en la frontera sur del país del norte, que involucraron a 740 mil 166 mexicanos el año pasado, 7.5 % menos que en 2022 y 4.7% más que en 2021, según datos de la OIM.

Colombia, que tiene una política migratoria con enfoque humanitario que ha llevado al país a recibir a 2.8 millones de venezolanos, pugnará en la cumbre regional sobre migración por poner fin a los discursos de odio, xenofóbicos y antilatinoamericanos que se registran en Estados Unidos en la coyuntura electoral.

El embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, asegura que exigirá respeto para los migrantes latinoamericanos que van a Estados Unidos implica, también, abrir la región al libre tránsito de personas con pleno respeto a sus derechos humanos. ●



López Obrador y Petro en la CDMX
Foto: Octavio Gómez

MIGRACIÓN

Cony Camelo. Denuncia de abusos

Foto: @conycamelo / Captura de pantalla



“Es un problema que viene de hace tiempo, pero desde hace dos años hemos detectado un aumento de detenciones arbitrarias de colombianos por parte de los agentes migratorios, tratos crueles, degradantes, incluso a menores de edad, y la violación del debido proceso”, dice Adriana Muro, directora de la ONG colombio-mexicana Elementa DDHH.

El responsable de todo esto, asegura, “es el Estado mexicano, que no ha querido dar pasos firmes para parar la situación”.

La congresista colombiana María del Mar Pizarro, quien hace tres años, antes de ingresar a la política, fue retenida durante 12 horas por *la migra* mexicana en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, considera que hay elementos para exponer este patrón de abusos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que el Estado mexicano responda.

Y es que, paradójicamente, México, que ha orientado parte de su política exterior a proteger los derechos de los migrantes mexicanos que ingresan a Estados Unidos y que sufren vejaciones de la temible migra de ese país, se está convirtiendo en un lugar de pesadilla para miles de visitantes colombianos que, incluso con toda su documentación en regla, son “inadmitidos” y violentados en sus derechos.

Abusos y rechazos, al alza

Lo más preocupante para el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, que tiene una gran cercanía política con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es que tanto las denuncias de abusos como las “inadmisiones” de connacionales que cumplen con todos los requisitos migratorios exigidos por México van en aumento.

Sólo en marzo pasado, los agentes del INM “inadmitieron” a cinco mil 719 colombianos en los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, una cifra superior en 141% que la registrada en el mismo mes del año anterior (dos mil 368), según datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación de México.

En el primer trimestre de 2022, el INM “inadmitió” a siete mil 624 colombianos, el 4.12% de los que llegaron al país por vía aérea en forma legal —esa nacionalidad no requiere visa para ingresar a México—, pero para el mismo periodo de 2023 la cifra saltó a nueve mil 800 y la tasa de rechazos fue de 5.47%.

En el primer trimestre de este 2024 el número de colombianos “inadmitidos” subió a 13 mil 839, cifra equivalente al 8.71% del total de nacionales de Colombia que visitaron ese país.

Es decir, si se comparan el periodo enero-marzo de 2022 y el mismo lapso de este año, la tasa de colombianos rechazados en México se duplicó. En marzo pasado, cada día en promedio fueron regresados a su país 446 personas, luego de pasar horas o días incommunicados, con hambre y sed, en el “cuarto de rechazo”.

“Vemos con preocupación que existe un alza significativa en la tasa de inadmisiones y en las quejas por malos tratos”, dice a esta revista el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, quien al igual que miles de sus compatriotas ha sido “retenido” y sometido a malos tratos por parte de la migra mexicana.

De acuerdo con el diplomático, su país entiende que México es soberano para decidir quién ingresa o no a su territorio y, aunque valora la disposición de la Cancillería y el INM para atender el problema, les ha planteado a los funcionarios de ambas dependencias que la excelente relación bilateral “no debe erosionarse por este tipo de situaciones”.

Lo que hay que destacar, dice, es que este problema “lo estamos atendiendo conjuntamente”.

El embajador señala que hay un flujo creciente de migrantes de sur a norte del continente y que eso genera una presión sobre varios países, pero la gran mayoría de colombianos que visitan México son turistas y no migrantes que busquen entrar como indocumentados a Estados Unidos.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el año pasado los colombianos representaron 6% de los “encuentros terrestres” de indocumentados reportados por las autoridades estadounidenses en su frontera sur, un porcentaje muy por debajo del correspondiente a otros países como México, Venezuela, Guatemala y Honduras.

En contraste, los colombianos ocupan el tercer lugar entre las nacionalidades de turistas que más visitan México, sólo detrás de los estadounidenses y los canadienses.

En Colombia, México gana fama de país hostil

El año pasado ingresaron a México 735 mil 177 turistas colombianos, pero esa cifra es menor en 14 por ciento a la de 2022. La caída coincide con la amplia difusión que han tenido en Colombia las malas experiencias de connacionales al arribar a México.

“Vemos con preocupación que existe un alza significativa en la tasa de inadmisiones y en las quejas por malos tratos”, dice a esta revista el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, quien al igual que miles de sus compatriotas ha sido “retenido” y sometido a malos tratos por parte de la migra mexicana.

“Esto está haciendo que muchos colombianos ya no quieran viajar a México y eso afecta negativamente al sector turístico”, dice la directora de Elementa DDHH, Adriana Muro.

Una familia de la suroccidental ciudad de Ibagué —de apellido González— denunció que el 29 de marzo pasado Migración de México mantuvo a sus cinco integrantes incomunicados más de ocho horas en el “cuarto de rechazo” del aeropuerto internacional Benito Juárez y los “inadmitió”, a pesar de que cumplían todos los requisitos exigidos a los turistas colombianos.

Colombianos rechazados

Foto: @conycamel0 /Captura de pantalla



La vocera de la familia aseguró que pasaron un año pagando en mensualidades alrededor de tres mil 800 dólares por el *tour*, pero la *migra* mexicana argumentó que no habían comprobado que tenían reserva en un hotel, lo que era falso. “Nos trataron como si fuéramos delincuentes y perdimos toda la inversión”, aseguró.

La influencia de la música y la cultura mexicanas en Colombia es tan potente, que es común escuchar decir a colombianos que sueñan conocer la Plaza Garibaldi, la Basílica de Guadalupe y el Zócalo capitalino, además de que Cancún se ha convertido en este país en el principal destino de playa del exterior.

Pero a raíz de las denuncias de maltratos e “inadmisiones” injustificadas, cada vez hay más colombianos que optan por cambiar sus planes y buscar destinos diferentes a México, como República Dominicana, Perú, Panamá y Argentina.

Ana Teresa, una joven artista plástica colombiana que viajó a México en 2022, cuenta que la *migra* mexicana la deportó por presumir, sin ningún elemento de prueba, que cruzaría a Estados Unidos o que tenía planeado ejercer la prostitución. Ella llevaba su boleto aéreo de vuelta, un comprobante de empleo en Colombia y recursos suficientes para sufragar su estadía en territorio mexicano.

“Pasé retenida 24 horas como un animal antes de que me deportaran –asegura–; dormí en el piso y sólo me dieron un pan y agua. Además, me robaron de mi maleta unos dibujos y toda mi ropa interior. Esto es como una guerra contra los colombianos. Quedé traumatizada”.

Ana Teresa dice que entre los colombianos “inadmitidos” se comenta que “de fijo, ellos (los agentes migratorios) tienen que cumplir una cuota diaria de rechazados, sin importar que afecten a los que llevan todo en orden”.

La congresista colombiana María del Mar Pizarro está convencida de que el creciente número de sus compatriotas “inadmitidos” en México responde a un lineamiento del INM para mostrar a Estados Unidos que el gobierno mexicano contiene la migración.

Varios turistas colombianos que viajaron a Cancún han denunciado que fueron “inadmitidos” luego de que un agente estadounidense vestido de civil, que actuaba junto con un funcionario mexicano del INM, revisó sus documentos.

Pizarro señala que cada país es soberano para establecer controles de ingreso a su territorio y aplicar a sus visitantes extranjeros las normas que considere pertinentes, “pero en ningún caso tiene derecho a maltratar a los migrantes”.

Bajo sospecha

María del Mar Pizarro sabe de qué habla porque lo ha vivido. Antes de ser congresista, era empresaria y tenía una compañía de productos de limpieza biodegradables en México, por lo que viajaba con frecuencia a ese país.

Hace tres años, en una de sus visitas, un agente migratorio del aeropuerto Benito Juárez “sospechó” de ella cuando le dijo que se hospedaría con unos familiares mexicanos. Él le pidió pasar al llamado “cuarto de rechazo”, donde le quitaron su teléfono celular y la hicieron entregar los cordones de sus zapatos, sus objetos personales y a un gato que llevaba en un huacal.

Señala que todo el tiempo el trato de los agentes migratorios fue “cruel, indignante y bastante agresivo, como si yo hubiera hecho algo ilegal”.



Migración en el AICM.
Denuncias por tratos crueles

Foto: @MoisesAlvaro_

Junto con ella fueron “retenidos” otros 15 colombianos que iban en el mismo vuelo, entre ellos una ejecutiva de un *call center* cuya visita era para abrir una sucursal en México pero que, luego de la experiencia, juró nunca volver a poner un pie en el país.

Luego de permanecer unas 12 horas retenida e incomunicada —a pesar de que la ley mexicana establece que la situación de cualquier migrante debe resolverse en un máximo de cuatro horas—, un funcionario del INM se paró frente a María del Mar Pizarro y le comunicó: “La vamos a deportar”.

Ello no ocurrió porque su familia mexicana se preocupó por no tener noticias de ella y llamó a un cónsul colombiano, quien le explicó a un alto funcionario del INM que María del Mar era una inversionista con familia en México y sin ninguna razón para cruzar como indocumentada a Estados Unidos porque, además, ella tenía visa estadounidense.

Fue entonces que le permitieron el ingreso a México junto con el gato —que llevaba a una prima—, pero otros “retenidos”, como una pareja del municipio colombiano de Mompós que llevaba cuatro años ahorrando para visitar el país de los mariachis, no tuvieron tanta suerte.

Entre los “inadmitidos” colombianos hay académicos, periodistas, actrices, deportistas, youtuberos y profesionales de diversas áreas que tienen trabajos estables y, en muchos casos, la visa estadounidense, por lo que no tienen ninguna necesidad de pasar como indocumentados al país del norte.

En todos los casos, las aerolíneas en que viajan son responsables de su alimentación y repatriación, pero la creciente cantidad de “inadmitidos” rebasa sus capacidades logísticas.

Un informe que preparan ONG y la Embajada de Colombia en México recopila decenas de testimonios de turistas colombianos violentados en sus derechos por la *migra* mexicana.

En ese expediente hay testimonios sobre casos de corrupción de agentes migratorios, policías aeroportuarios y marinos —la Armada asumió el año pasado el control y el manejo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México— que cobrarían hasta 30 dólares por una llamada telefónica de un minuto y hasta 350 dólares por una comida.

El embajador de Colombia en México, Moisés Nínco Daza, explica que “hay receptividad” en el alto mando del INM para avanzar en correctivos. Por ejemplo, la instalación de máquinas expendedoras de alimentos y

agua potable en los centros de retención y autorizar el acceso permanente a esas zonas del personal consular colombiano. Y, desde luego, impedir los abusos.

Algunas denuncias reiteradas ante la Embajada son que los agentes migratorios nunca dan copia del formulario de “inadmisión” a los visitantes rechazados, para evitar que éstos cuenten con una constancia, y que esos funcionarios colocan datos falsos en la documentación oficial y presionan a los deportados para que los firmen.


“Inconsistencias en la entrevista” es la genérica y ambigua causa de “inadmisión” que esgrime la burocracia migratoria mexicana en los formularios en la gran mayoría de los casos, según han podido leer los expulsados antes de firmar.

El embajador señala que “los malos tratos y las irregularidades en los procesos de inadmisión no son aceptables ni justificables de ninguna manera y sobre esa base estamos trabajando con las autoridades mexicanas”.

Para la congresista Pizarro, quien considera a México un país hermano, la política del INM hacia los visitantes colombianos no ayuda ni a impedir que aumente el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos (94 % de quienes cruzan el Río Bravo son mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños y de otras nacionalidades) ni a enfrentar al crimen transnacional organizado.

Proceso tiene testimonios de “submarinistas” y “lancheros” colombianos que llevan cargamentos de cocaína a México y que, al llegar a ese país, tienen contactos en el INM que les sellan sus pasaportes, como si hubieran ingresado de manera legal por algún aeropuerto. Esto les permite regresar quitados de la pena a Colombia, en la comodidad de un vuelo comercial.

Es decir, los criminales tienen los recursos suficientes para corromper a las autoridades y eludir cualquier tipo de control. Los ciudadanos comunes no. Y son estos últimos a quienes están criminalizando los agentes migratorios mexicanos.

Esta revista buscó conocer la versión del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre las denuncias, pero no obtuvo respuesta por parte de la oficina de prensa del organismo. 



Comuneros de San Pedro Quiatoni emprenden una lucha legal –y de ser necesario, advierten, física y material– contra la mina El Águila, de la estadounidense Gold Resource Corporation, debido a que desde 2011 sus desechos están causando estragos en los recursos hídricos, flora y fauna del municipio. Su esperanza era que el presidente López Obrador atendiera el caso, pero el mandatario e instancias como la Sernat y la Profepa simplemente los han abandonado.

Una minera **SE LLEVA EL ORO** y deja pozos secos, peces deformes y magras cosechas



PEDRO MATÍAS

SAN PEDRO QUIATONI, Oax.- De pie, en la cima del cerro, mientras contemplan la siniestra belleza azul turquesa de la presa de jales de la mina El Águila, filial de la compañía estadounidense Gold Resource Corporation, comuneros y autoridades en defensa del territorio de este municipio zapoteco hablan de su desgracia:

“Lo que se veía tan lejano ya nos alcanzó, se desencadenaron los malos augurios...”, se refieren a que el agua dulce del río de la comunidad se ha infiltrado de sustancias tóxicas de la presa.

Hace 11 años entró en operaciones la mina El Águila en San José de Gracia, y los pobladores describen los saldos contaminantes: mencionan enfermedades como el cáncer y daños irreversibles en la naturaleza porque se secaron los manantiales y ojos de agua, se cancelaron pozos de agua potable y los peces tienen deformaciones.

Comuneros de San Pedro Quiatoni, Soledad Salinas, San Pablo Lachiriega y La Mancornada fueron guías en un recorrido que **Proceso** realizó en esta comunidad.

Desde uno de los playones del Río Grande, contaron: “Aquí nos bañábamos, nadábamos y pescábamos. El río era nuestra fuente de vida porque servía para regar los cultivos de donde comemos, pero desde hace 11 años se convirtió en veneno”.

El cielo de esta microrregión de la sierra sur es límpido y atestigua la transformación de su medio ambiente. El agua del Río Grande todavía se ve diáfana, pero ya nadie se atreve a meterse a nadar porque causa ronchas en la piel y el agua que corría dulce ahora tiene un sabor salado.

Los pobladores dicen que desde 2011, cuando se inició el proyecto El Águila, filial de la empresa minera estadounidense, se desencadenaron las calamidades en San José de Gracia.

Los daños a la biodiversidad y a las personas después de más de una década de la operación de El Águila son vistos como irreversibles. El pueblo ha exigido la cancelación de la mina, y hay un juicio de amparo que se desahoga en tribunales.

En su asamblea comunitaria tomaron la determinación de defender tierras y territorio, y hacerlo "con todos nuestros esfuerzos físicos, materiales y legales para impedir que se siga cometiendo la explotación desmedida e irracional de nuestros recursos naturales y minerales", señalaron.

El presidente municipal de San Pedro Quiatoni, Marcelo García Sánchez; el comisionado de Bienes Comunales, Martín López López; el presidente del Comité Pro-Defensa de la Tierra y el Territorio, Raymundo López García, así como los representantes jurídicos Simitrio Ruiz y Elías López Martínez hablaron con **Proceso** sobre la resolución que otorgó una suspensión de plano el 13 de febrero de 2023, emitida como resultado del amparo y que las empresas mineras no la acatan.

Detallaron que en la demanda promovida en los juzgados federales, y radicada con el número 178/2020 en el Juzgado Primero de Distrito, se señalaron como actos reclamados la entrega de 12 concesiones en favor de las mineras Don David Gold, SA de CV (11 concesiones), y Minerales El Prado, SA de CV (1 concesión), que se otor-

garon sin que las autoridades federales hubieran consultado a toda la comunidad, conforme a la normatividad.

Como antecedentes, el 28 de noviembre de 2021 la denuncia por esta problemática llegó a la Presidencia de la República. Autoridades municipales y agrarias entregaron un documento en el que solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para agilizar la cancelación de la concesión de la minera estadounidense.

Al año siguiente, el 3 de octubre de 2022, los habitantes del pueblo solicitaron audiencia a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González. A la fecha no hay respuesta.

Un informe de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) reveló que en Oaxaca, según datos oficiales, hasta 2020 se encontraban vigentes 294 concesiones mineras; de éstas, la Secretaría de Economía, junto con el Servicio Geológico Mexicano, tienen registrados 45 proyectos mineros.

Sobre esos proyectos se precisa en el informe que 36 se encuentran en etapa de exploración, dos están en etapa de desarrollo (Trinidad Norte y Monte Albán I), tres están en etapa de explotación comercial (San José, Alta Gracia y El Águila) y otros cuatro, en etapa de postergación (Yolanda, Cobre Grande, Santa María Ecatepec y El Tejón).

El pozo de Soledad Salinas, que la población tardó 17 años en construir, ahora está contaminado

Foto: Especial



En su página de internet, Gold Resource Corporation dice que reforzó sus objetivos de minería en México, principalmente en El Águila donde extrae oro y plata, esencialmente.

"El Proyecto El Águila se compone actualmente de 10 concesiones mineras por un total de 20 mil 55 hectáreas. Múltiples cúpulas volcánicas de diversas escalas, y probablemente cúpulas intrusivas sin ventilación, dominan la geología del distrito de San José de Gracia Minería en Oaxaca", reseña la página <https://mining-mexico.com/gold-resource-refuerza-su-estrategia-en-su-proyecto-el-aguila-en-oaxaca/>.

Aunque esta revista solicitó entrevista con un representante de la empresa minera, vía el contacto indicado en su propia página, no hubo respuesta.

Gold Resource Corporation difundió que vendió un total de ocho mil 746 onzas de oro y 231 mil 622 onzas de plata en el segundo trimestre de 2022.

Y detalla: "La producción total de oro equivalente sumó 11,475 onzas. Además, la compañía vendió 3,590 toneladas de zinc, 286 toneladas de cobre y 1,755 toneladas de plomo. Lo que contribuyó a un sólido saldo de efectivo de más de 33 millones de dólares".

En defensa del territorio y la salud

Con el permiso de la asamblea comunitaria de San Pedro Quiatoni, **Proceso** efectuó el recorrido con la guía del Comité Pro-Defensa del Territorio para constatar los impactos negativos de la mina.

El proyecto se encuentra a sólo 118 kilómetros de la capital de Oaxaca. Se llega al lugar por la carretera 190 Oaxaca-Istmo de Tehuantepec hasta el kilómetro 115, precisamente en la comunidad de San José de Gracia. Después de ahí hay que recorrer 2.60 kilómetros hasta llegar a la bocamina.

El recorrido se realizó con las autoridades que integran el Comité Pro-Defensa del Territorio de San Pedro Quiatoni: Raymundo López García, Vicente Martínez Zárate y Néstor Cruz Martínez, para adentrarse en el camino que conduce a la mina.

A lo largo de ese último trayecto se pudo ver una manguera o tubería de seis pulgadas semienterrada, misma que salía de la bocamina y desembocaba en el Río Grande, a donde arroja agua contaminada. Es una longitud de casi tres kilómetros.

A unos metros de la bocamina ya esperaban al menos 20 comuneros que fueron comisionados por la asamblea para acompañar este recorrido.

Un tramo se hizo en vehículo, después fue necesario caminar por una brecha hasta llegar a la cima del cerro El Águila, desde donde es posible observar una gran reserva de agua color turquesa. Es la presa de jales (desechos de la mina).

Néstor Cruz Martínez, uno de los integrantes del comité, explicó que en enero de 2023 hubo una fuga en esa presa y empezó brotar una vena de agua cerca de la zona poblada de San José de Gracia, única comunidad que dio autorización a la empresa minera.

Fue hasta ese momento en que la población pidió una explicación a la compañía de origen estadounidense. La inconformidad surgió porque los habitantes notaron que comenzaron a sufrir algunos padecimientos que no eran comunes. La empresa les aseguró que se trataba de un yacimiento de agua limpia "y que la podían tomar".

Sin embargo, los comuneros exigieron a personal de la empresa que ellos bebieran esa agua primero, pero éstos se negaron. Finalmente aceptaron que iban a ver cómo cerraban esa fuga.

De hecho —dijo Néstor Cruz—, "ya hay muchas afectaciones en la comunidad, hay enfermedades como cáncer, hay testimonios de gente que trabajó en la mina y que ahora padece de varias enfermedades. Ya están arrepentidos de haber concedido el permiso de explotación minera, pero ya es tarde".

Dijo que incluso habitantes de San José ya se mudaron del lugar, "no sé si la empresa minera les está comprando lotes o terrenos en otros lugares para que se muden".

El presidente del comité de defensa del territorio de San Pedro Quiatoni, Raymundo López García, asegura que ya se han visto otro tipo de impactos también en su territorio zapoteco, en Santa Ana Tavela, Magdalena Yautepéc y Nejapa de Madero.

"Lo que hemos notado es que los pozos (veranos, ojos de agua, manantiales) se han secado. Los comuneros vienen a reportar a la oficina del comisariado de bienes comunales y es ahí donde ellos nos piden intervenir porque no tienen agua ni para los animales".

Aquí la gente está acostumbrada a que casi a flor de tierra hay brotes de agua, pero todos esos pozos se están secando.

"Nosotros le atribuimos a que la minera, al hacer su túnel, cortan las venas de agua y desvían para otros lados, y al hacer ese tipo de trabajo mezclan todos los metales que hay dentro y se convierte en veneno. No tenemos el nombre técnico, pero se convierte en veneno", denuncia Néstor.



Presa de jales vista desde el cerro El Águila. Desechos de la minera

Foto: Especial

También explica que, aunque hay una concesión que autorizó San José de Gracia, la empresa hace explotación subterránea en territorio de San Pedro Quiatoni.

Ésa es la razón, insistió, en que dentro de su territorio ya se están presentando estos casos (los pozos secos, tierras áridas, hambruna, enfermedades y hasta habitantes desplazados).

De acuerdo con el censo de 2020, Quiatoni tiene 11 mil 930 habitantes y se rige por el sistema normativo interno (usos y costumbres), por lo que mediante asambleas comunitarias decidió defender su territorio "a costa de lo que sea".

Raymundo López refirió que, cuando empieza a llover, se desborda la presa (de jales) y todo eso baja al arroyo y luego al río, por lo que además esa agua va a parar a la presa de Jalapa del Marqués.

Por ello, advierte: "Tarde o temprano esta contaminación va a llegar allá, pero todos los pueblos vecinos del Istmo de Tehuantepec que están por allá abajo no saben, no conocen qué es lo que está pasando acá arriba y nosotros que vivimos aquí cerca ya lo estamos padeciendo".

En el municipio de San Pedro sólo se pide la cancelación de esta empresa por la contaminación y los efectos que están padeciendo. "De lo contrario, el pueblo va a tomar otras medidas y entonces sí que el gobierno se atenga a las consecuencias", advirtió el representante.

A estas comunidades, personal enviado por la minera les ha asegurado que no hay contaminación y que trabajan bajo las normas ambientales.

"Nosotros lo que le pedimos al gobierno federal (es) que nos apoye, que vea esto, que nos haga caso, esto es contaminación para nosotros. Ya hemos llevado agua de río para que lo chequen en laboratorios, ¿y qué dicen? Dicen que es agua apta para tomar y nosotros les volvemos a decir, ¿por qué no se vienen a echar un trago de esa agua?, a ver si es cierto que no está contaminada", expone Vicente Martínez Zárate.

Raymundo muestra en el recorrido la tubería que va a desfogar al Río Grande, que en los costados está semienterrada, oculta a la vista de la gente.

"Esa agua contaminada ya va directamente al río y ese río va a dar al Istmo. Ahorita la gente no se ha dado cuenta, pero a la larga, de aquí a cinco o 10 años, quién sabe qué pasará. Nosotros ya lo estamos viviendo".

Raymundo López, presidente del Comité Pro-Defensa de la Tierra y el Territorio

El recorrido continuó hacia la comunidad de Soledad Salinas, donde el encargado del comité del agua, Prudencio Martínez Jiménez, mostró el pozo que construyó la población mediante el tequio (trabajo comunitario no remunerado).

El pozo se empezó a construir en 2002 y se terminó en 2019, pero “por cuestión de la minería decidimos no consumir el agua. Desde 2005 dejamos de consumir por cuestiones de salud”.

Esto significa que más de seis mil habitantes se quedaron sin el recurso, no la utilizan ni para consumo de animales. Lo único que hacen es darle mantenimiento a la bomba. El agua que se consume en la comunidad viene con mangueras desde el cerro, donde excavaron otro pozo.

Agua dulce que sabe salada

Después de una hora de camino, río abajo, de Soledad Salinas se llega a La Magdalena, Yautepec, donde este reportero habló con las autoridades reunidas.

Tomó la palabra don Juan Reyes Zárate. Mientras relata cómo el problema de la contaminación por la minería se ha ido mostrando lentamente, otros comuneros sacaron de una hielera unas mojarras que recién pescaron en el Río Grande.

“Ya se empiezan a ver los efectos de la contaminación del agua. Nuestro alimento lo obtenemos del río. Nos dedicamos a la pesca de mojarras, bagres, sardinitas, pero hoy estos animales ya están contaminados y aquí tenemos la prueba de unos peces contaminados”, dice. Los comuneros mostraban unas mojarras pequeñas que ya no crecen, pero que además presentan ámpulas en todas sus aletas.

“Desde hace cinco o seis años que se empezaron a ver esas deformaciones. Se ven raros y tienen como granitos en el cuerpo”, relataron.

En el lugar ya no se bebe el agua del río, sino de los manantiales. “Tal vez por eso estamos resistiendo. También el cultivo ya no se da igual, sentimos que el agua está muy salada y hay mucha gente enferma”.

Y agregó: “De qué nos sirve tener una casa de salud muy bonita si por otro lado hay mucha contaminación y muchos enfermos”.

Los médicos que van esporádicamente al Centro de Salud les dan calmantes o antibióticos, pero no tienen equipo para hacerles estudios.

Por ello, el comité se encuentra documentando los casos de enfermedades y padecimientos de la gente de estas localidades para presentarlos a las autoridades federales.

Lo que preocupa es que hay muchas comunidades a orillas del río, rancherías —a unos 15 kilómetros están Santo Domingo, Santa María Nizaviguiti, Santiago Quiavicuzas, Lachixila— que se alimentan del pescado.

Juan Reyes Zárate lamenta: “Ya no es como antes, que pescaba uno y comía uno sabroso, a llenarse; ahora ya no se puede. Además, el agua está salada como si fuera de mar y el río ha bajado mucho, tiene un olor muy feo. Huele a podrido o como animal muerto”.

El año pasado las autoridades municipales y agrarias de San Pedro Quiatoni advirtieron que si no se cancelan las 12 concesiones mineras de las empresas Don David Gold y Minerales El Prado, que afectan su territorio, realizarán acciones contundentes que definirán “políticamente el estado en los próximos años.

Reyes Zárate expone: “La asamblea comunitaria de San Pedro Quiatoni determinó su rechazo a toda la clase política (porque) solamente en periodos electorales se acuerdan de nuestra comunidad. No serán bien recibidos, sean del color que sean”.

San Pedro Quiatoni, sus seis agencias municipales y 32 rancherías no han recibido ningún apoyo de la empresa y no quieren ni un solo peso de ella. Lo único que exigen es la cancelación definitiva de esa mina.

Pese a que las autoridades de San Pedro mostraron documentos que han sido entregados a instancias de gobierno, como la solicitud de audiencia a la titular de Semarnat, María Luis Albores González, en esta dependencia negaron tener alguna denuncia del tema.

Tanto la Semarnat como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente respondieron a una solicitud de **Proceso**: “No se tiene registrada ninguna denuncia interpuesta por la comunidad de San Pedro Quiatoni por la contaminación del río, las enfermedades entre la población y las deformaciones de los peces, ocasionado por las empresas Don David Gold México S. A. de C.V.”

Respecto de la contaminación del río y pozos alimentadores de la población, así como malformaciones en los peces del Río Grande, las dependencias arriba citadas respondieron que “tampoco es competencia de esta autoridad”.

KAROLINA GILAS

Voto retrospectivo

La decisión de por quién votar es un proceso complejo influenciado por múltiples factores. Sin embargo, la valoración del desempeño del gobierno actual destaca como uno de los elementos más determinantes. Esto se conoce como "voto retrospectivo": las personas basan su elección no tanto en un análisis prospectivo y racional de las propuestas, sino en su percepción sobre la gestión del partido en el poder.

En otras palabras, el voto opera en buena medida como un premio o castigo para el partido en el gobierno. Si la ciudadanía considera que el gobierno ha sido eficaz y ha mejorado sus condiciones de vida, tienden a recompensar a ese partido con la renovación de su confianza en las urnas. Por el contrario, si sienten que la administración ha sido incompetente o corrupta, la castigan votando por la oposición.

Esta lógica del voto retrospectivo tiene un fundamento intuitivo. Después de todo, la mejor predicción del comportamiento futuro de un gobernante es su comportamiento pasado. Si un partido ha demostrado ser capaz de manejar adecuadamente el país, es razonable esperar que continúe haciéndolo. Y si ha fallado, es comprensible querer probar con una alternativa diferente.

Pero, ¿qué aspectos específicos de la gestión gubernamental son los que más peso tienen en la evaluación de las y los votantes? Los estudios sugieren que la situación económica es el factor predominante. Indicadores como el crecimiento, el empleo, la inflación y el poder adquisitivo son clave. Si la economía va bien, el oficialismo cosecha los réditos; si va mal, paga los platos rotos. Este aspecto lo tenía muy claro Bill Clinton, al definir su estrategia electoral a través de la frase "es la economía, estúpido".

Otros elementos relevantes son el manejo de crisis (desde desastres naturales hasta conflictos sociales), el cumplimiento de las promesas de campaña, los escándalos de corrupción, la efectividad

de las políticas públicas y el liderazgo proyectado por el presidente. Todos estos factores moldean la imagen que la ciudadanía tiene del gobierno y, por ende, su intención de voto.

La teoría del voto retrospectivo ayuda a entender patrones electorales históricos. Por ejemplo, la reelección de un presidente suele estar fuertemente vinculada al estado de la economía. Cuando la economía va bien, los mandatarios tienden a ser ratificados, como ocurrió con Clinton en 1996 o Bush Jr. en 2004. En cambio, las recesiones suelen ser letales para las aspiraciones oficialistas, como le sucedió al propio Bush Sr. en 1992.

Hay que reconocer aquí que las percepciones sobre la situación económica son subjetivas y esa subjetividad suele ser más influyente que los indicadores objetivos del desempeño gubernamental. Las personas filtran la realidad a través del lente de sus propias experiencias, valores y expectativas, y basan su voto en cómo sienten personalmente el impacto de las políticas y acciones del gobierno. Por eso, pese a un buen desempeño económico en medio de la crisis, el partido Plataforma Cívica perdió las elecciones polacas de 2014, dando paso a un gobierno autoritario.

En este sentido, un gobierno puede tener logros impresionantes en términos de crecimiento económico, creación de empleo o estabilidad macro, pero si la ciudadanía no percibe que estos indicadores se traducen en mejoras tangibles en su calidad de vida, pueden optar por un cambio de liderazgo. Las percepciones sobre la distribución de la riqueza, la justicia social y el bienestar individual o familiar pueden pesar tanto o más que las estadísticas económicas.

El voto retrospectivo, entonces, se basa en una compleja mezcla de evaluaciones objetivas y subjetivas. Las y los votantes ciertamente toman en cuenta indicadores concretos de desempeño, pero los interpretan mediante sus propias experiencias y expectativas. En este contexto, entonces, aquellos

que logran comunicar efectivamente cómo sus políticas mejoran la vida de la gente común, no sólo en teoría sino en la práctica percibida, tienen una mayor probabilidad de ser recompensados con el apoyo en las urnas.

Por supuesto, la cuestión económica no es la única —aunque sí, al parecer, la más frecuente— que las personas toman en cuenta a la hora de votar. En cualquier caso, o, más bien, tratándose de otros asuntos relevantes, aplican las mismas lógicas de valoraciones subjetivas y la (usual) miopía.

¿Qué significan estas explicaciones para las elecciones mexicanas de 2024? El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene índices de aprobación relativamente altos al cierre de su mandato, rondando el 58% en abril, según la medición de Alejandro Moreno para *El Financiero*. Esto contrasta con la baja popularidad de su predecesor, Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo con apenas un 32% de respaldo, aunque lo colocaba en condiciones similares a los presidentes panistas. Al final de sus respectivos mandatos, Vicente Fox (2000-2006) tenía una aprobación de alrededor de 64%, mientras que Felipe Calderón (2006-2012) rondaba el 66 por ciento.

En cuanto al desempeño del gobierno, la misma encuesta indica que sólo 28% de las personas valoran positivamente el manejo de la economía, frente a un 42% de las opiniones negativas. Solo el 20% califica positivamente la seguridad pública, frente a un 68% de calificaciones negativas. El rubro mejor evaluado son los apoyos sociales, con 57% de opiniones positivas y sólo 26% negativas. Estos datos sugieren que el aspecto más fuertemente vinculado con la valoración del presidente es su política social. Aunque AMLO ha enfrentado críticas en temas

como seguridad y corrupción, la percepción general parece ser que su gobierno ha sido más eficaz en el combate a la pobreza y la desigualdad. Los programas sociales, como las pensiones universales y las becas para estudiantes, aparentemente han generado una base de apoyo sólida entre sectores históricamente relegados.

Por supuesto, la alta aprobación de AMLO no se traduce automáticamente en votos para su partido y sus candidaturas. Las y los electores también evalúan a los perfiles específicos y las dinámicas nacionales y locales, y llegan a tomar sus decisiones con base en los aspectos distintos al desempeño económico o disponibilidad de los programas sociales.

En última instancia, el voto retrospectivo puede verse como un mecanismo de rendición de cuentas. Si los gobernantes saben que su futuro político depende de su gestión, tienen un poderoso incentivo para actuar con responsabilidad y eficacia. Y si la ciudadanía premia a los buenos gobiernos y castigan a los malos con su voto, está ejerciendo su soberanía para moldear el rumbo del país.

Por supuesto, este mecanismo no es perfecto: llega a fomentar políticas cortoplacistas, las personas no cuentan con información completa para evaluar el desempeño gubernamental y, además, suelen evaluar a partir de parámetros y criterios diversos. Aun así, en una democracia representativa, el voto retrospectivo sigue siendo una herramienta fundamental para asegurar que el poder responda ante la voluntad popular. Mientras la ciudadanía siga recompensando los buenos resultados y sancionando los malos en las urnas, los gobernantes tendrán que rendir cuentas. Y ésa es, en esencia, la promesa básica de la democracia. ■

JAVIER SICILIA

Violencia y campañas

Nadie sabe de dónde viene el mal. La mitología, la teología, la filosofía, la psicología y las ciencias sociales han dado múltiples explicaciones. Ninguna es contundente. Lo que, en cambio, puede decirse es que su presencia tiene una profunda capacidad difusiva y de contagio que se expresa como violencia y tragedia.

México es un claro ejemplo de ello. En 15 años la violencia se apoderó de él hasta convertirlo en su rehén: cientos de miles de asesinatos y desapariciones, grandes franjas del territorio tomadas por bandas criminales, colusiones de las autoridades con ellas, corrupción, inseguridad, impunidad, linchamientos y miedo.

El principal responsable es el Estado. Pese a que la sociedad civil ha creado instituciones para detenerla (la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, durante el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto; la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, durante la administración del propio Peña Nieto; y la propuesta de una política de Estado basada en la justicia transicional con dos mecanismos independientes y apoyados por la comunidad internacional, a inicios del gobierno de López Obrador), los mismos gobiernos se han encargado de destrozarlas y, en el último caso, de desdeñarlas y malversarlas.

Frente a esa realidad, lo que se esperaría del próximo gobierno sería un acuerdo de Estado para, retomando la política de justicia transicional, construir una ruta clara y firme hacia la paz.

Por desgracia, tanto los partidos como sus candidatas, candidatos y correligionarios, no sólo continúan ignorando la dimensión y la complejidad de la violencia, sino también y, por lo mismo, difundiendo su virus.

Durante las campañas políticas no hemos visto otra cosa. Lejos de hacer una autocrítica en relación con su responsabilidad en la tragedia humana del país y, a partir de allí, proponer un acuerdo de Estado a largo plazo para revertirla, tanto el presidente como los partidos, las candidatas, candidatos y correligionarios no han dejado de ejercerla. Su accionar durante las campañas ha sido el desprecio, la descalificación y la lucha por demostrar quién es más o menos corrupto, quién tiene en su haber más o menos muertos; quién posee un pasado más impecable; en síntesis, quién, para decirlo con una palabra que le gusta usar a una de las candidatas, es más "chingón o más chingona". La palabra —hay que releer el *Laberinto de la soledad*— delata la violencia de la que alardea el macho y describe, como pocas, la realidad del país.

"Ser chingona o chingón" no sólo quiere decir "ser mejor que otro". Su origen, como lo describe ese libro fundamental, viene del ver-

bo "chingar", que en México se relaciona con la brutalidad. "Chingar —dice Octavio Paz— es hacer violencia sobre otro. Un verbo masculino, activo, cruel: hiere, desgarrar, mancha y provoca una amarga, resentida satisfacción en el que lo ejecuta".

Ser chingón, en México, quiere decir "ser mejor" porque nos "chingamos" a otro, lo "jodimos", "le rompimos la madre".

No importa que se diga de manera graciosa y con el sentido descafeinado de "ser competente" como lo hace Xóchitl o que se exprese con la vileza de los criminales y los funcionarios corruptos. Las palabras no son inocentes, guardan y revelan dimensiones del ser de un pueblo. Y ésta, que está en el fondo de las acusaciones, difamaciones, alardes de pureza que los partidos, candidatas, candidatos y correligionarios se lanzan a la cara, que exaltan los medios de comunicación y se expresa de manera despiadada en los crímenes que padecemos diariamente, no sólo revela el virus que habita en parte del *ethos* de nuestra cultura, sintetiza también el lenguaje y las acciones de los criminales que se extienden, a través de muchas otras expresiones —los corridos tumbados, los lenguajes de odio de las redes sociales—, a lo largo y ancho del país convirtiéndolo en una intrincada selva. En ella, vuelvo a Paz, "hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas o en los presidios, leones con los amigos. El soborno se llama 'morder' [o 'moche']". Los burócratas roen sus huesos (los empleos públicos). Y en un mundo de chingones, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría [de la que nuestras

candidatas se han contagiado], el valor personal, capaz de imponerse".

Ésa es la temperatura del país. Es también la que envuelve a las campañas. La palabra misma, utilizada para sacralizar el remedo de democracia que se reduce a las urnas, tiene también un tufo violento, de guerra, que anuncia una difusión más terrible y letal del virus.

Mientras los partidos, sus candidatas, candidatos y correligionarios no entiendan que el mal se apoderó de nosotros, que para escapar de él, además de dejar a un lado el odio, es necesario hacer una profunda y seria autocrítica, y construir una agenda de unidad nacional transexenal, cuya prioridad sea la verdad, la justicia y la paz; mientras no comprendan que el Estado está desfigurado por la corrupción y la violencia, y sólo puede sanarse mediante mecanismos de verdad y justicia representados por ciudadanos independientes de los gobiernos y apoyados por la comunidad internacional, estaremos destinados a habitar un infierno cada día más espantoso y más hondo. La ignorancia, la hipocresía y la ceguera que acompañan a las campañas políticas, me recuerda al San Agustín de las *Confesiones*: "Buscaba de dónde viene el mal y no salía de él".

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. ☞

TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ*

Candidaturas presidenciales, *sin comprender* la nueva migración mexicana

Desde la perspectiva de los procesos migratorios que transcurren en México, las tres candidaturas a la Presidencia del país han evidenciado la profunda incomprensión que estos procesos tienen entre la élite política, no obstante de que se trata del inmenso elefante en la sala.

En principio, la primera gran incomprensión —y desatención— corresponde a la *nueva migración* de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos. A pesar de ser una movilidad humana enorme, de miles y miles de personas, se le ignora una y otra vez. Debe aclararse que no se trata de aludir con nostalgia a los “héroes y heroínas” que envían remesas desde el extranjero, a quienes tampoco damos el reconocimiento debido. Hoy el asunto es reconocer a las nuevas migraciones mexicanas que iniciaron en este sexenio, exactamente a mediados del año 2020, y que hoy constituyen el flujo humano más importante de la región y, muy probablemente, del mundo.

Este nuevo torrente de mexicanos es el omitido, una y otra vez. No obstante, es la abierta expresión de profundas problemáticas sociales que tienen las regiones de México, prácticamente a lo largo de todo el territorio. La nueva migración es un termómetro sobre deterioros sociales en curso. No solamente porque una parte de los nuevos flujos estén asociados con los costos de la pandemia del covid, al haber deteriorado ingresos o provocado la pérdida de empleos; no es solamente por la necesidad de atender los gastos que para las familias significó la gravísima crisis de salud y además sus repercusiones paralelas.

Esta parte de la nueva migración mexicana —llamémosle derivada de factores económicos, ligada además con la demanda laboral desde Estados Unidos— representa aproximadamente 60% del actual flujo migratorio. La parte complementaria es la socialmente crítica. Se trata de un nuevo y terrible flujo: el de familias que huyen de sus regiones debido a la inseguridad, violencias y por la ausencia de Estado de derecho.

Nunca en la historia migratoria de México habíamos tenido una movilidad de estas dimensiones y características sociales, desplazada y forzada a buscar asilo en Estados Unidos: son nuestros refugiados, por miles y miles. Son la consecuencia más grave y violatoria de todos los derechos, provocada cotidianamente por el crimen organizado que predomina en muchas regiones del país.

Solamente entre febrero de 2023 y febrero de 2024 la autoridad migratoria de Estados Unidos registró 800 mil “encuentros” con personas de nacionalidad mexicana arribando a su frontera sur. De este total, cerca de 300 mil arribaron en *grupo familiar*. Cuando son familias las que integran la movilidad migratoria estamos ante un proceso distinto del que explica la movilidad de adultos solos, como ocurría predominantemente durante la vieja etapa de la migración mexicana.

A pesar de ello, cuando las candidatas y el candidato a la Presidencia refieren a la migración mexicana, invariablemente aluden a tiempos anteriores, refiriendo a quienes viven hoy en Estados Unidos. Está muy bien... pero no pueden ni deben ignorarse los nuevos flujos y

sus determinantes —sobre todo los derivados del desplazamiento forzado por violencias—, pues con su omisión se alejan de lo que realmente sucede en el país e ignoran uno de los problemas sociales más crudos. No deben pasarse por alto nuestros recientes problemas, ni las miles de tragedias cotidianas que están detrás. Sería inaceptable para quienes aspiran a gobernar México.

Seguir pensando que la problemática migratoria y de refugio que tiene México es una cuestión de extranjeros, equivale a observar la parte menor del problema. La parte mayor, literalmente, es mexicana: no hay ninguna otra población en movimiento de dimensión siquiera equivalente. El nudo central de la problemática migratoria no son los venezolanos, ni los centroamericanos ni los colombianos, ecuatorianos o cualquier otra nacionalidad.

La cuestión principal es lo que sucede en México. Si se omite esta perspectiva del principal debate político, como sucede en las actuales campañas por la Presidencia de la República, cualquier proyecto de nación será deficiente y basado en un diagnóstico que no corresponde con la realidad.

Si para las candidatas y el candidato su comprensión de la problemática migratoria se limita a los mexicanos en Estados Unidos y a los extranjeros en tránsito por México, su perspectiva corresponde al espejo de hace cuatro y más años.

La migración y sobre todo el refugio deben comprenderse como un observatorio y termómetro de deterioros sociales, tanto más profundos como la escala humana en movimiento. Evidentemente es nuestro caso, en ruta acelerada desde mediados de 2020, después de más de una década de relativa estabilidad y mínima movilidad migratoria. Sigue ahora rectificar el rumbo y evitar más injusticias. En lo inmediato, es fundamental que la clase política verdaderamente reconozca los problemas de la nación y actúe para resolverlos. No son tiempos para seguir inventando o ignorando realidades. 🗳️

*Profesor del PUED / UNAM
Excomisionado del INM

El escenario actual es mucho más complejo y tiene por protagonista a la migración y a los refugiados mexicanos que demandan, por lo menos, como un mínimo generoso, el reconocimiento de que existen.

CARLOS MARTÍNEZ ASSAD

Irán y su ensayo estratégico

El pasado sábado 13 de abril el mundo estuvo en vilo esperando el desenlace de la anunciada andanada de drones y misiles enviados desde Irán hacia Israel. Como lo ha hecho su rival más poderoso, Irán definió su acción como “el derecho a defenderse” invocando que se trataba de responder al ataque lanzado por Israel al consulado iraní en Damasco, en el cual liquidó a siete militares integrantes de la Guardia de la Revolución iraní. Fue Daniel Hagari, portavoz del ejército de Israel, quien dio la alarma para prevenir a su población. Y algo inusitado, informó que los lanzamientos de Irán habían comenzado y se esperaba su llegada a lo más en cuatro horas. Pidió dirigirse a los refugios dispuestos en las ciudades y no abandonarlos hasta ser informados.

En un hecho insólito, por primera vez Irán respondía a las numerosas acciones del ejército de Israel contra varios de sus personajes, de preferencia a los militares y a los vinculados con su programa nuclear que ha tratado de frenar a toda costa. El temor de esos lanzamientos se vincula a las expectativas generadas por el programa de misiles balísticos del que es responsable Amir Ali Hajizadeh, un no tan viejo militar quien desde la guerra Irán-Irak (1980-1988) se integró a los guardianes de la revolución como tirador de élite al lado de Hassan Tehrani Moghaddam, el creador del programa del desarrollo de los misiles.

En 2003 Irán alardeó con la creación de los misiles Shahab-3B, capaces de recorrer dos mil kilómetros, que continuó construyendo en un programa imparable que pareció concretarse en 2021. Todas las armas son aterradoras, más una como esta que mide 16 metros de largo y seguramente pesa algunas toneladas. Todavía

más grave es la posibilidad de hacerles transportar cabezas nucleares de las que todavía carece Irán. Pero, por si fuera poco, su programa balístico ha continuado y se dice que el país cuenta con drones que pueden recorrer siete mil kilómetros y cuenta ya con los misiles supersónicos Fatah II, capaces de recorrer 18 mil kilómetros.

Es difícil saber entonces lo que significaba un lanzamiento como el realizado y sus consecuencias en cualquier nación, aun cuando no sabemos con exactitud –pese a los que insisten en dar números– cuántos ni de qué tipo fueron los lanzados. En Israel se dio, como era de esperarse, un ambiente de guerra, las autoridades pidieron a los israelíes suspender todo tipo de actividades. Señaló que el ejército estaba alerta, pero sus aviones caza no salieron de inmediato al espacio para enfrentar la agresión sino hasta más tarde, cuando reforzaron el domo de acero, capaz de neutralizar los misiles enemigos, en lo que también participaron Estados Unidos y Jordania, supongo que porque, siendo un país árabe que mantiene relaciones con Israel, y está en sus inmediateces, también podía ser blanco de las armas iraníes.

No se trató de un ataque como el que hiciera Estados Unidos e Inglaterra sobre Irak en 2003, cuando de buenas a primeras aparecieron por televisión las imágenes de la ciudad de Bagdad iluminada por el intenso bombardeo. Por eso resultó extraño que se anunciara un ataque horas antes de que los misiles llegaran a su destino y sólo se recomendara resguardarse.

Se dice que fueron 286 misiles los que fueron lanzados e interceptados al llegar al espacio aéreo israelí protegido por la alta tecnología que permite hacerlos estallar antes de llegar

a tierra y causar gran destrucción. Surgen entonces las preguntas sobre la capacidad de los drones y misiles lanzados, si todos tenían la potencia de los Shahab-3B y si los drones son los mismos que Rusia ha utilizado en su guerra con Ucrania.

Israel se preparó para el ataque, pero no queda claro por qué no salió a enfrentar la agresión ni se dio una movilización militar de los países aliados, aunque sí estuvieron las consabidas declaraciones de apoyo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Incluso los países miembros de la OTAN temen al programa balístico de Irán y no hubo una reacción concertada, como era de esperarse. Además se sabe que Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen aprovecharon para lanzar sus cohetes de reducida capacidad.

Entonces ¿qué fue todo esto? Probablemente se trató del ensayo generalizado de una guerra entre dos de las potencias de la región, en la que Irán demostró el alcance de fuego de sus armas pasando por varios países, incluso por bases estadounidenses.

Es posible que de alguna manera en la cumbre donde se toman las decisiones se sabía de los efectos que podía causar la avalancha dirigida hacia Israel, lo cual no evitó el gran temor de los israelíes. No obstante, para Israel significó un triunfo mostrar su enorme y rápida capacidad defensiva, logrando reducir el total de las armas que perturbaron su noche. Y, además, el tan criticado gobierno de Benjamin Netanyahu, cuestionado por los mismos israelíes que

le exigen dejar el cargo, logró dar de nuevo la seguridad que le reclaman por todos los eventos que lo han rodeado luego del asalto de Hamás del 7 de octubre pasado y los seis meses de guerra con Hamás destruyendo Gaza.

Por su parte, los iraníes festejaron por las calles el éxito de la acción de su ejército y vitoreaban mientras exhibían carteles mostrando el músculo de su país, triunfante desde su perspectiva al saldar cuentas con su proverbial enemigo. Lo cual distraía a su población de la crisis que se ha vivido, en particular debido a las manifestaciones de mujeres reclamando sus derechos.

Esta podría ser la conclusión de ese episodio. Sin embargo, resulta difícil que lo sea cuando el gabinete de guerra de Israel ha expresado que un ataque de tal magnitud –aunque sin que nadie saliera lastimado salvo una niña beduina herida– no puede quedarse sin respuesta. Aunque las presiones para detenerse son fuertes de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea. A nadie conviene la destrucción de centrales petroleras por la crisis que suele generar en el mercado internacional si el petróleo iraní se sustrae de la producción. Nada puede asegurarse de lo que sucederá en ese futuro incierto que se cierne sobre Medio Oriente... y el mundo. 



Las guerras de Ucrania y Palestina

PONEN A PRUEBA

a la Unión Europea

Los conflictos bélicos en Palestina y Ucrania han concienciado a los países que conforman la Unión Europea de que deben prepararse ante un latente escalamiento de intensidad de los combates y que esto dé vía a un eventual ataque ruso. Asimismo los ha obligado a reevaluar su estrategia de seguridad, la cual ha evidenciado que dependen en gran medida de la voluntad de Estados Unidos, advierten académicos, investigadores y políticos.

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

MADRID.—Rodeada por dos guerras, en Ucrania y Palestina, la Unión Europea ha mostrado dos varas de medir ante cada una de éstas, tanto en su política común como en la diplomacia individual:

Ante Vladimir Putin plantaron cara cohesionados, pero frente a Israel y su líder Benjamín Netanyahu ha habido división, del apoyo absoluto y sin matices de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Alemania, al impulso de España e Irlanda a la vía de los "dos Estados" (Israel y reconocer a Palestina) como único horizonte para la paz duradera.

Las instituciones europeas y los gobiernos de la zona, además, miran con preocupación el desenlace de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, ante un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que podría exacerbar ambas crisis y perturbar aún más el ajedrez geopolítico.

"La Unión Europea se encuentra entre dos guerras, en Ucrania y en Palestina. No participa en ellas directamente, pero le afectan existencial y geopolíticamente", aseguró Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, en un artículo en la edición de febrero de la revista *Política Exterior*.

Ambos frentes, planteaba, son "retos ineludibles para la UE".

Y eso que Borrell no incluyó la crisis del flanco sur, la creciente inestabilidad en el Sahel, donde se impusieron juntas militares en siete países africanos tras derrocar a gobiernos legítimos en sólo tres años.

Es "la región africana más castigada por el terrorismo yihadista", como señala el informe del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno español, conocido este abril. En esta zona actúan el grupo Boko Haram, y filiales de Al Qaeda y el Estado Islámico, que conviven y permiten que prosperen negocios de mafias del tráfico humano, de armas y de drogas que miran a las costas europeas.

Como consecuencia de la crisis Israel-Gaza podría crecer el riesgo en la seguridad para los países europeos en la franja mediterránea, advertencia que hasta ahora ha tenido poco eco en Bruselas, más atenta al escenario ucraniano.

Según el International Crisis Group, las situaciones de seguridad en Sudán, Etiopía y el Sahel son especialmente volátiles, y se suman a la escalada de tensiones en Medio Oriente, desde Israel y Gaza hasta Irán y el Mar Rojo, así como a las terribles situaciones humanitarias en Yemen y Libia.

Seguridad Made in USA

En este marco, Josep Borrell fue el último en unirse a la narrativa de la guerra, que se extiende en los discursos de las instituciones europeas y en los gobiernos de los países socios.

Fue en un evento en Bruselas, el 9 de abril, donde el jefe de la diplomacia europea dijo que "la posibilidad de una guerra convencional de alta intensidad no es una fantasía. Obviamente, tenemos que hacer todo para evitarlo, pero para disuadir al adversario tenemos que tener los medios", en alusión a la demanda de aumentar el gasto militar para incrementar las capacidades de defensa de la región.

Primero fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien a fines de febrero advirtió en el Parlamento Europeo que "no se deben exagerar los riesgos de guerra, pero sí debemos prepararnos para ella", al referirse peligro que supone para Europa un eventual intento de ataque ruso.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también se sumó al señalar que Europa debe pasar a una "economía de guerra" como única opción ante el desafío que supone Rusia. "Si queremos la paz, tenemos que prepararnos para la guerra", y "si la Unión Europea no da la respuesta correcta y no otorgamos a Ucrania

suficiente apoyo para detener a Rusia, nosotros seremos los siguientes", planteó en un artículo que publicó en varios medios europeos y que fue recogido por Reuters.

Gesine Weber, investigadora de política común de seguridad y defensa de la UE y en relaciones transatlánticas, sostiene que "la guerra de Rusia contra Ucrania ha demostrado claramente que la seguridad europea sigue siendo *made in USA*". Esta defensa territorial se basa "no sólo en la voluntad de la administración de Estados Unidos de garantizar la defensa del continente, sino en términos muy concretos del electorado republicano y de su voluntad de apoyar un segundo mandato de Donald Trump. Tal escenario hace saltar las alarmas en las capitales europeas por el riesgo que supone un potencial desafío a la cláusula de defensa mutua de la OTAN, una fuerte reducción o interrupción del apoyo estadounidense a Ucrania y, más en general, por la imprevisibilidad de la política exterior estadounidense".

En un artículo publicado el 8 de enero en *Le Gran Continent*, Weber advierte que "las elecciones estadounidenses representan el mayor desafío para la defensa europea en 2024", aunque hasta los países más atlantistas reconocen que ese compromiso estadounidense con Europa será "efímero", porque la tendencia de la política exterior estadounidense —evidente antes de la era Trump y que continúa con Biden— indica que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y su compromiso con Europa ha sido "un paréntesis fruto de la necesidad estratégica".

El dilema de los europeos: aparte de mantener ese compromiso estadounidense, al mismo tiempo deben "preparar estrategias para mitigar los riesgos de un posible abandono en caso de reelección de Donald Trump". La única manera de lograrlo sería reforzar significativamente las capacidades en el ámbito operativo, estratégico o industrial, "pero por el momento, las medidas adoptadas y la voluntad política de ir más allá son insuficientes para conseguirlo".

Weber plantea que el apoyo europeo a Ucrania "no tiene precedente", de acuerdo con datos del Instituto de Kiel para la Economía Mundial. Sin embargo, a dos años del inicio de la invasión, el futuro de este apoyo es cada vez más incierto: "Las reservas europeas de armas siguen agotándose y el apoyo financiero a Ucrania está poniendo a prueba los presupuestos de los Estados miembros. En un contexto en el que la situación militar parece cada vez menos favorable para Ucrania, numerosos sondeos muestran la aparición de la fatiga bélica en la opinión pública europea".

En este marco es que la OTAN puso en marcha el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría, con la participación de 90 mil militares de 31 países. El plan *Steadfast Defender* (Defensor Firme) tiene como objetivo simular un "escenario de conflicto emergente con un adversario cercano", que no es otro que el de disuadir a Rusia de atacar a cualquier país miembro de la Alianza Atlántica.

Esta movilización cobra mayor relevancia tras las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump de que los miembros de la OTAN que no cumplan las directrices de gasto (2% del PIB) dejarían de estar protegidos por Estados Unidos, de repetir él en la Casa Blanca.

La doble moral

La voz uniforme de todo Occidente frente a Putin se convirtió en un coro desafinado y desacompañado ante la guerra Israel-Gaza, lo que dinamizó la capacidad de interlocución europea en la región.

La primera sorpresa fue el viaje a Tel Aviv de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para dar un apoyo absoluto a Israel, a unos días del ataque de Hamás. "Israel tiene el derecho a defenderse. Incluso, tiene el deber de defenderse y defender a su población", dijo.

Su respaldo a Israel y fotografiarse con Netanyahu le acarreó duras críticas entre algunos de los 27 socios, porque se extralimitó en sus funciones al fijar una posición que no había sido consensuada en forma conjunta. Sus posteriores mensajes para pedir contención a Israel por el daño causado en Gaza han sido absolutamente tibios, sólo ha pedido al país judío "hacer más" para proteger a los civiles palestinos.

El canciller alemán, Olaf Scholz, también brindó un apoyo sin ambages a Israel tras el ataque de Hamás, que provocó 1,400 víctimas mortales y 242 secuestrados. "La seguridad de Israel es una prioridad fundamental para Alemania", dijo, casi imitando el tono del apoyo estadounidense.

Francia, Italia y Reino Unido mostraron su "firme apoyo" a Israel en un primer momento, aunque los dos primeros fueron más cautos en declaraciones posteriores.

Lo más cuestionable fue que los gobiernos alemán, francés, suizo y británico (los dos últimos no son parte de la UE) impusieron prohibiciones a manifestaciones propalestinas en su territorio, aunque las medidas fueron desatendidas por miles de ciudadanos. En la capital francesa, por ejemplo, miles de manifestantes desafiaron la restricción y fueron dispersados por los policías antidisturbios equipados con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Esther Major, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa, exigió la protección al derecho de protesta ante el agravamiento de la situación en Israel

y en los territorios ocupados palestinos. "Las autoridades de muchos países europeos están restringiendo de forma ilegítima el derecho de protesta, con medidas que van desde actuar contra determinadas consignas, banderas y símbolos palestinos hasta someter a manifestantes a la brutalidad policial y la detención. En algunos casos se han prohibido totalmente las protestas".

"Los dos Estados"

Rashidi Khalidi, profesor de estudios árabes modernos en la Universidad de Columbia, sostiene que en esta guerra entre "colonizadores y colonizados, opresores y oprimidos, no ha habido nada remotamente parecido a una equivalencia entre ambos bandos, sino más bien un enorme desequilibrio a favor del sionismo y de Israel".

Netanyahu. Inflexible ante Palestina

Foto: AP photo / Jacquelyn Martin

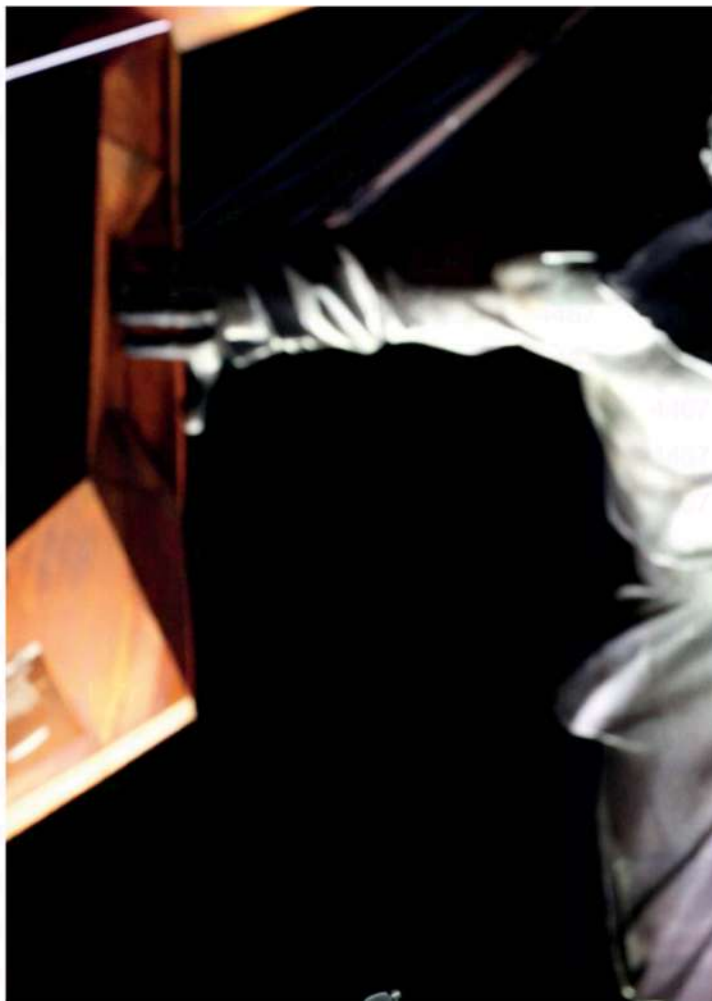


El autor de *La guerra de los cien años contra Palestina: una historia de colonización y resistencia de los colonos* (Profile, 2020) escribió en el diario británico *The Guardian* que esa tesis se confirmó tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, "con los desequilibrios de poder evidente en los niveles desproporcionados de muerte, destrucción y desplazamiento: la proporción entre palestinos e israelíes asesinados hasta ahora es de aproximadamente 25 a 1", en referencia a los más de 33 mil muertos palestinos, ocho mil desaparecidos y el desplazamiento forzado de millón y medio de personas.

Khalidi señala que esta guerra que lleva varias generaciones nunca ha sido "sólo entre el sionismo e Israel, por un lado, y los palestinos, por el otro". Siempre, como ahora, ha implicado la intervención de potencias como Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países occidentales. "Estas grandes potencias nunca fueron neutrales ni mediadoras honestas, sino participantes activos en esta guerra en apoyo a Israel".

Ante la corriente de países que impulsan la "solución de dos Estados (Israel y Palestina), el especialista cree que suena "vacío", porque no ve señales de que Estados Unidos vaya a exigir a Israel los prerequisites esenciales para tal solución: "un fin rápido y completo a la ocupación militar de casi 57 años de Israel y a su usurpación y colonización de tierras palestinas, que ha plantado a casi 750 mil colonos ilegales en 60% de Cisjordania y Jerusalén Este", ni que aceptaría que "los palestinos elijan democráticamente a sus propios representantes".

Lo considera un "cruel engaño orwelliano", porque "en lugar de la autodeterminación, la condición de Estado y la soberanía palestina, mantendrían efectivamente el *status quo* en Palestina bajo una forma diferente, con una 'autoridad palestina' colaboracionista controlada externamente y carente de jurisdicción o autoridad real reemplazada por un 'Estado palestino' colaboracionista. Sería una farsa: un archipiélago desarticulado de bantustanes (zona de segregación en el *apartheid* africano) bajo el control último de Israel, con supervisión financiera y de seguridad por parte de Estados Unidos y sus aliados árabes y de Europa occidental".



Quien sí apoya esta vía es el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien propuso una serie de doce pasos, que Israel ha rechazado muy molesto porque las palabras del catalán han irritado a la sensible élite política y militar de Israel. Primero, porque durante su visita a un *kibutz* atacado por Hamás, declaró: "un horror no justifica otro" y ha criticado que Israel use el hambre "como arma de guerra".

Más contundente fue en su discurso al recibir un doctorado *honoris causa* por la Universidad de Valladolid, donde Borrell acusó directamente a Israel de financiar a Hamás para debilitar a la autoridad palestina. "Sólo creemos que una solución de dos Estados debe ser impuesta desde el exterior. Que Israel se reafirma en esa negativa, y para impedirlo han llegado ellos mismos



Putin. Amenaza para la Unión Europea

Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

a crear Hamás; sí, Hamás ha sido financiada por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah (organización política del extinto Yasser Arafat)".

El presidente español Pedro Sánchez es uno de los que impulsa esta vía de los dos Estados, junto con Irlanda, Noruega (no miembro de la UE) Eslovenia y Malta. Bélgica es afín a la propuesta, pero como presidente de turno del Consejo Europeo debe mantener una postura de neutralidad.

Pol Bargués y Moussa Bourekba, investigadores del *think thank* Barcelona Centre for International Affairs (conocido como CI-DOB), advierten que son muchos y muy diversos los obstáculos que tendría ese proceso de paz, iniciando porque no se podría imponer y por las posturas tan contrarias entre los dos actores, Israel y Palestina

En un artículo sobre el tema (publicado en la página de CI-DOB), citan la negativa de Netanyahu, quien señaló que en "cualquier acuerdo de futuro, el Estado de Israel debe tener el control total del área, desde el río hasta el mar", es decir, de toda la Franja de Gaza.

"Para convencer al gobierno de Tel Aviv sería necesaria una fuerte presión externa que parece imposible a tenor del apoyo incondicional a Netanyahu que ha mantenido Washington, incluso ante los crímenes de guerra que el ejército israelí está cometiendo". Y ni Moscú ni Beijing han mostrado intención de involucrarse, mientras que los países de la región están centrados en evitar el avance de un conflicto regional.

Los investigadores sostienen que la Unión Europea (principal socio comercial de Israel y mayor proveedor de ayuda exterior a los palestinos) "ha sido incapaz de impulsar la paz entre unos y otros", porque la renuncia de Bruselas y de Washington para presionar a Israel

para que detenga su campaña militar "ha deslegitimado a la UE en Palestina y en buena parte de Oriente Próximo". No obstante, dicen, esto se podría revertir "si hubiera un reconocimiento del Estado palestino a nivel de la UE".

Y quizá el obstáculo "más espinoso", señalan, es "el rol de Hamás en las futuras negociaciones entre israelíes y palestinos". El grupo militante responsable de las atrocidades del 7-O "es un actor que Israel quiere erradicar, y que Estados Unidos y la Unión Europea han calificado de grupo terrorista. El dilema por lo tanto es el siguiente: por un lado, cualquier intento de negociación será argumento para que Israel no se involucre; por otro, excluir a Hamás, que mantiene el apoyo de parte de la población en Gaza y un creciente respaldo en Cisjordania, aumentará la división en el seno del liderazgo palestino", señalan Bargués y Bourekba. "Hablar de paz es tan necesario como fácil es intuir un infinito de obstáculos", añaden. 📌

Espacio Escultórico y paisaje

Valoran en Italia la grandeza de Ciudad Universitaria



Naturaleza y cultura
Foto: Eduardo Miranda

La Universidad Nacional Autónoma de México, en 1983, tras un acuerdo histórico, creó la REPSA (Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel), que hoy alcanza un total de 237 hectáreas, descomunal extensión donde habitan 300 plantas nativas, 800 especies de artrópodos y 30 de mamíferos. Sólo puede accederse a ella en dos sitios intervenidos por artistas: El Espacio Escultórico y el Paseo de las Esculturas. El ecosistema, resultado de la erupción del volcán Xitle, fue objeto del Premio Internacional para el Paisaje “Carlo Scarpa”. Silke Cram, secretaria ejecutiva de la REPSA, y Louise Noelle, secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones en Ciudad Universitaria, explican su enorme trascendencia.

NIZA RIVERA

Con 237 hectáreas de un ecosistema insólito en medio de una megalópolis: de ese tamaño es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) en resguardo de la UNAM.

Pero igualmente grandes son sus amenazas y sus retos. El principal de éstos, incorporar a la reserva 68 hectáreas más.

Habitan en este “pulmón verde” al sur de la Ciudad de México, que se divide entre la Ciudad Universitaria y El Pedregal de San Ángel, alrededor de 300 plantas nativas, unas 800 especies de artrópodos —arácnidos, insectos, crustáceos— y 30 de mamíferos —entre los vertebrados.

Hoy ya ese patrimonio mexicano —único en el mundo— empieza a ser valorado internacionalmente, pues en marzo pasado el Espacio Escultórico y la REPSA de Ciudad Universitaria se hicieron acreedores al Premio Internacional para el Paisaje “Carlo Scarpa”, de Italia, aunque los medios nacionales no le dieron amplia cobertura. El jurado internacional se asombró de este “lugar poético y sugestivo, que emerge de la aparente desolación de un terreno de piedra volcánica”.

La REPSA no es visitable en un 90%, pues el ecosistema está cerrado al público para proteger su flora y fauna silvestre, endémica; además, es difícilmente transitable a pie por las piedras volcánicas heredadas del Xitle (“xictli”, del náhuatl “ombligo”), cuya erupción ocurrió hace 1670 años, abarcando alrededor de 80 kilómetros a la redonda. De acuerdo a los especialistas de la UNAM, al momento de la erupción la cultura cuicuilca ya estaba en decadencia, y el evento geológico borró sus vestigios.

El 10% visitable de la REPSA se distribuye entre dos sitios: el Espacio Escultórico (que sufrió en 2016 una agresión visual cuando se construyó en sus terrenos el llamado “Edificio H”) y El Paseo de las Esculturas, ambos inaugurados en 1979; el decreto de reserva universitario se otorgó hasta 1983, fruto de un movimiento por parte de ecologistas y universitarios que avizoraron el rápido crecimiento urbano (sobre todo inmobiliario) de la capital mexicana en los ochentas.

Lo natural y lo humano en el Paseo de las Esculturas

Foto: Eduardo Miranda

El premio italiano “Carlo Scarpa”, otorgado cada año por la Fundación Benetton Studi Ricerche con sede en Treviso, se concedió de manera unánime en su trigésima tercera edición, correspondiente al periodo 2023-2024. Y para el 12 de abril se programó una exposición fotográfica sobre el Espacio Escultórico y la REPSA en la sede denominada Ca’ Scarpa, misma que cerrará el 30 de junio.

Para el 13, día de la entrega del galardón, se planearon en la Fundación Benetton Studi Ricerche diversas actividades, como la presentación del volumen *El espacio Escultórico y el paisaje del Pedregal de San Ángel, México. Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, 2023-2024*, realizado por Patrizia Boschiero y Luigi Latini.

Asimismo, se proyectó el documental *Pedregal: la storia del' Espacio Escultórico*, dirigido por Davide Gambino. Y dio inicio un coloquio público en la UNAM.

Desde un principio se anunció que el premio, consistente en una escultura, fuera recogido por la escritora Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, en nombre del rector Leonardo Lomeli Vanegas, y la *Gaceta de la UNAM* señaló que el reconocimiento condecora lugares significativos “en valores de naturaleza, memoria e invención”.



Fue una comisión científica de 10 especialistas europeos que seleccionó al Espacio Escultórico por ser una obra colectiva, así:

“Espacio que abraza estratificaciones geológicas e históricas desde la antigüedad de los cuicuilcas a la escultura modernista, todo incorporado en un paisaje dinámico que estimula la reflexión y permite el disfrute público en un constante devenir modelado por las estaciones, el clima y la luz.”

Otros espacios que han obtenido ese reconocimiento italiano son los Tea gardens de Dazhangshan, en China; los Ceides Fiels, en Irlanda; los Dura Europos, en Siria; la Otaniemi Chapel, en Finlandia, y Los Caminos de Pikionis de la Acrópolis de Atenas, en Grecia (<https://www.fbsr.it/>).

“Asilvestrarse”

Aunque son vecinos del Centro Cultural Universitario, tanto el Espacio Escultórico como el Paseo de las Esculturas no se encuentran en resguardo de Cultura de la UNAM, sino de un Comité Técnico de REPSA. En entrevista directa, Silke Cram Heydrich, su secretaria ejecutiva, explicó sobre el significado del “Carlo Scarpa”:

“Llega en un buen momento por la crisis ambiental que se vive en general, hay quienes dicen que es un momento crítico o límite, e incluso hay quien dice que los daños son tan severos que no hay regreso.

—¿Cuáles son los retos de estar al frente de esta reserva?

—Es un gran reto y ha sido un reto para todos los que han estado al frente de la reserva en distintos momentos, y me iría más lejos, para todos los que trabajan en áreas naturales protegidas, por eso tenemos este *Atlas de riesgo de la REPSA*, editado en 2012 (http://www.repsa.unam.mx/documentos/Lot_et_al_2012_Atlas_de_riesgos.pdf) —dice mientras muestra el volumen físico—. Ahí se describen las amenazas a las que se enfrenta la reserva como la presencia sistemática de personas que maltratan, y todo lo que conlleva el paso humano.

“El otro gran riesgo son los incendios, aunque todas las amenazas en realidad son detonadas por la actividad humana. Y quizá el mayor reto al que se enfrentan todas las personas que resguardan la naturaleza o ecosistemas originarios es que el ser humano no los valora como tal, siempre tiende más a dar valor a un edificio o construcción, porque no dimensionamos lo que nos da en temas de salud, nos enfrentamos a la visión de que lo urbanizado tiene más valor que el ecosistema originario”.

Contó que mientras se siga pensando —incluso al interior de la UNAM— que un espacio como la REPSA “no tiene nada”, y se aplique la definición de “bonito” como un pasto verde perfectamente podado y flores colocadas ordenadamente, será complicado apreciar a la reserva en su belleza y majestuosidad:

“Tenemos que ‘asilvestrar’ nuestra mente un poco para entender la belleza visual de la reserva”.

La REPSA, dijo, incorpora a académicos en prácticas de campo buscando sumar a la investigación y docencia de la propia universidad:

“La reserva es una aula viva, lo hacemos para que se identifiquen con ella, y es también una forma de mostrar a autoridades que este no es un terreno baldío sin uso. El que la UNAM reserve un espacio como éste, da esperanza a universitarios pero también a muchos jóvenes en materia de sustentabilidad haciendo y demostrando que se puede”.

Actualmente hay 9 personas trabajando en la REPSA, algunas de ellas contratadas por honorarios, por lo cual, para trabajar mejor, afirmó a pregunta expresa, “sería bueno reconocer un equipo más sólido”.

La especialista identificó un tercer espacio visitable de la REPSA, la denominada “Senda Ecológica” colindante en la parte trasera con el Museo Universum, lugar un tanto perdido y que debería reactivarse.

—¿Cómo imaginar la REPSA en 50 años?

—Nuestra forma de trabajar ha sido con reuniones. Una de ellas tiene que ver con esa pregunta: “imaginar la reserva en 30 años”. Los más escépticos pensaban: “¿Queremos que siga o que todo esté urbanizado?”. Quiero imaginar que en 30 años logremos un cambio de pensamiento, cambiando nuestra forma de pensar”.



Cram Heydrich. Al frente de la REPSA

Foto: Germán Canseco

Noelle. Seis grandes escultores

Foto: Eduardo Miranda



Cram hizo un breve repaso del mencionado *Atlas...* donde aparece un mapa de las 237 hectáreas, y reflexionó sobre la posibilidad mediata de incluir 20 hectáreas colindantes más dentro del circuito universitario; asimismo, una tarea pendiente de incorporación posible para el Comité Técnico: Hay 48 hectáreas del lado de El Pedregal (cruzando la Avenida Insurgentes), que llamó "lunares de reserva", espacios desperdigados que al día de hoy pueden llegar a ser presas de inmobiliarias o construcciones.

El *Atlas...* consigna que la reserva inició en 1983, en un acuerdo histórico, con 124 hectáreas; se le añadieron 23 más en 1990; en 1996 subió a 172, para 1997 eran 212, y desde 2005 hay un total de 237 hectáreas.

La joya de la corona

Por su parte, Louise Noelle puso énfasis en el Espacio Escultórico como una magna obra que conjugó la idea de seis de los más importantes escultores mexicanos del momento, idea poco común incluso para estos días. Ellos son: Helen Escobedo, Hersúa, Sebastián, Federico Silva, Manuel Felguérez y Mathias Goeritz.

Se trata de un círculo de 120 metros de diámetro rodeado por 73 prismas triangulares.

Y en un segundo momento y como hermanas del Espacio Escultórico, designó las obras del Paseo de las Esculturas: *Ave Dos* de Hersúa, *Coatl* de Escobedo, *Colotl* de Sebastián, *Corona del Pedregal* de Goeritz, *Variante de la Llave de Kepler* de Felguérez, *Ocho Conejos* y *Las Serpientes del Pedregal* de Silva:

"La idea provenía de la Ruta de la Amistad —ideada para los Juegos Olímpicos de 1968—. Aquí se trabajó en conjunto en un *land art* (arte de la tierra), que tiene que ver con el entorno y que no se puede comprender de una sola mirada... esa es la maravilla de tenerla en la UNAM. Una tercera parte de Ciudad Universitaria es reserva ecológica para siempre, y tiene una corona que fi-

sicamente es redonda, el Espacio Escultórico".

Luego de observarse basura en la entrada del Espacio Escultórico, y cuestionársele al respecto, comentó:

"Los universitarios lo cuidamos lo mejor que podemos con los medios que tenemos. La idea original es que el Espacio Escultórico estuviera limpio de plagas, que fuera la fuerza de la roca en su núcleo... no se logra totalmente porque para ello se tendrían que poner productos químicos y le harían daño al entorno, entonces de repente se corta a mano, esa parte

(núcleo) del espacio no se puede como en un principio se pensó".

Tras un recorrido por el Paseo de las Esculturas se observa que *Ave dos* se encuentra delimitada con una reja, pues la obra se está rehabilitando, y hasta el cierre de esta información se hallaban siete trabajadores en labores en la zona.

"Hay un mantenimiento —insistió Noelle—. Se pintan cada determinado tiempo. Hay quien repite 'no cuidan las cosas', pero no es un jardín y no se pretende que lo sea, crecen unas cosas y otras mueren. Hay un plan de mantenimiento".

—¿En qué beneficia el "Carlo Scarpa"?—

—Scarpa es un arquitecto italiano reconocido que hizo muy pocas obras de gran sensibilidad, comparable con Luis Barragán, cuya obra final es poca pero de enorme trascendencia y sensibilidad. El premio es una presea, no hay dinero involucrado, es el reconocer, y el jurado vino personalmente a ver la obra. Vieron en Oaxaca, aquí el Parque la Mexicana, vieron varias y escogieron a la reserva, su idea es no quedarse encerrados en Italia, sino salir, ver".

Finalmente abordó también los retos de la REPSA:

"De construir no se puede, han habido intentos de ocupaciones ilegales, las personas de la reserva están cuidando y vigilando, está todo enrejado pero con hoyos en la parte baja para que los animales puedan ir y venir, porque ellos no entienden de enrejados. Y en esta época estar atentos por los incendios.

"Silke Cram y los directivos de la reserva están atentos a que este sitio privilegiado continúe, es nuestro deber pasarlo como patrimonio a siguientes generaciones...". @

Francisco J. Múgica: No fue presidente, pero sus ideas siguen marcando agenda

JUDITH AMADOR TELLO



Al general revolucionario Francisco J. Múgica (1884-1954) se le rememora como el hombre de todas las confianzas del presidente Lázaro Cárdenas que, sin embargo, al momento de la sucesión presidencial quedó fuera y nunca gobernó México.

A él le habría gustado ser recordado cada 5 de febrero en el aniversario de la Constitución mexicana:

"Mi obra fundamental, mi aporte al país", solía decir de ella.

Porque los artículos que hicieron de la Carta Magna de 1917 una de las más avanzadas en el tema social, en su momento, fueron propuestos por el general nacido en Tingüindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884, y fallecido el 12 de abril de 1954.

Aunque ahora, en el 140 aniversario de su natalicio y 70 de su muerte, no se le esté organizando un gran programa oficial conmemorativo, como se le está dedicando a Felipe Carrillo Puerto (1874-1924).

Doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autora del libro *Francisco J. Múgica. El presidente que no tuvimos* (FCE, 2019), Anna Ribera Carbó habla en entrevista con **Proceso** de ese impacto que tuvo el general y político michoacano en la construcción del México moderno:

"Es un personaje fundacional del siglo XX, no sólo fue diputado constituyente, fue el presidente de la primera Comisión de Puntos Constitucionales, como responsable de la radicalización del proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza a la Asamblea Constituyente al término de la revolución armada. Él mismo reconocía que ese fue uno de los momentos

El legado del general se estampó en cuatro artículos de la Constitución: Radicaliza el 3º, estableciendo la laicidad en la enseñanza; del 27, puso límites a la propiedad privada y colocó la soberanía del Estado sobre los bienes del suelo y el subsuelo; añadió el 123 con los derechos obreros; y el 130, en el cual se definieron las relaciones con la Iglesia. No obstante, el giro del actual gobierno hacia el nacionalismo revolucionario, y la similar confrontación con el conservadurismo, hacen hablar a la doctora en Historia por la UNAM, Anna Ribera Carbó, de la polémica sucesión de 1940, y aborda el hecho de que no se haya definido un programa oficial conmemorativo por el 70 aniversario de su fallecimiento.

fundamentales en su vida, porque radicaliza el artículo 3º estableciendo la laicidad en la enseñanza; del 27, que puso límites a la propiedad privada y estableció la soberanía del Estado sobre los bienes del suelo y el subsuelo, las aguas interiores, el mar territorial...”.

Asimismo, añade el artículo 123, en el cual se establecen los derechos obreros; y el 130, en el cual se definieron las relaciones con la Iglesia:

“Esos cuatro temas marcan la agenda del siglo XX mexicano y son temas que seguimos debatiendo: la educación, la soberanía de los recursos, las leyes agrarias, desde luego las leyes laborales y la relación con el clero. En ese sentido es un personaje central”.

La cuestión es si el radicalismo de sus ideas ha trascendido a la actualidad y si está presente en los debates actuales. La investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) considera que, después de “grandes reformas regresivas a ese texto constitucional” realizadas a lo largo de varias décadas —entre ellas la energética de Enrique Peña Nieto—, ahora se están intentando retomar cuestiones como la soberanía energética:

“Y justo hoy, aniversario de la expropiación del petróleo (18 de marzo, día en que se llevó a cabo la entrevista), me parece que de alguna manera Múgica vuelve a estar vigente”.

Desde luego es un personaje que quedó muy olvidado, tal vez por el papel en la elección presidencial de 1940...

Pero a decir de Ribera Carbó, la vida de Múgica, quien gobernó Michoacán y Tabasco, tuvo momentos trascendentales no sólo en la elaboración de la Carta Magna. El gobierno cardenista fue uno de ellos porque

ahí se aplicaron sus contenidos, que hasta entonces eran sólo texto.

Con Cárdenas, en cambio, hacen un buen reparto agrario y se expide la Ley de Expropiación de 1936 que permite, un par de años después, la nacionalización del petróleo. Al mismo tiempo, había una gran movilización obrera con la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Ahí, sigue la historiadora, está Múgica, primero como secretario de Economía Nacional, y tras la disolución del primer gabinete de Cárdenas, como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, con lo cual “participa en todas las decisiones trascendentales del sexenio, sobre todo las de infraestructura, hace un trabajo muy importante en la construcción ferroviaria, de presas, caminos, carreteras”.

Fue un periodo donde las derechas se empeñaban en mostrar las “tendencias comunistas” en Lázaro Cárdenas, por lo cual éste prefirió delegar en Múgica —“la figura ideológicamente más cercana a él”— asuntos como la recepción de refugiados políticos, entre ellos León Trotsky, con quien “prudentemente” el presidente prefirió no reunirse.

— Pero Múgica sí era más cercano al comunismo... ¿no podría decirse que fue marxista?

— No, no, el general Múgica desde luego manifestó su enorme simpatía por el pensamiento socialista, entendido como una propuesta justiciera que se empalmaba con los afanes de la Revolución en la cual él participó. Veían al socialismo como una meta a alcanzar en algún momento, pero nunca militó en el Partido Comunista, ni se definió a sí mismo como comunista.

Señala que hubo varios políticos mexicanos del ala más radical de la Revolución vinculados a la Constitución del 17, que ya de suyo era “muy radical” al poner límite a la propiedad agraria y restablecer la soberanía sobre los recursos. Por la influencia de la Revolución rusa, agrega, se adopta una terminología semejante a ésta, pero no era comunista.

— ¿Mantendría su deseo de ser recordado el 5 de febrero luego de todas las reformas hechas a la Constitución, sobre todo la del periodo neoliberal a partir de Salinas de Gortari e incluso cuando con Peña Nieto se busca privatizar algunas de las industrias petroleras?

—Yo creo que sí. A él le seguiría gustando la idea de ser recordado ese día, justamente en defensa del texto original de la Constitución que ha sido terriblemente manoseado, alterado, tergiversado.

La sucesión del 40

Destaca la investigadora que después de las elecciones presidenciales de 1940, donde figura Manuel Ávila Camacho como uno de los posibles sucesores de Cárdenas, y no Múgica, éste se fue distanciando del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y desde luego del Partido Revolucionario Institucional (PRI):

"Fue denunciando las desviaciones de los regímenes que siguieron, y finalmente apoyó a un partido opositor que justamente reivindicaba el texto constitucional en las elecciones del 52, donde apoyó a Miguel Enríquez Guzmán frente al candidato oficial".

Reconocido, a decir de Ribera Carbo, como "maestro ideólogo" de Cárdenas, Múgica está marcado como el hombre que no llegó a la Presidencia, se quedó en el camino cuando la apuesta era que profundizaría en las radicales reformas del llamado *Tata*. De ahí el título del libro *El presidente que no tuvimos...*

Ribera Carbo. Soberanía energética

Foto: Antonio Nava /SCCDMX



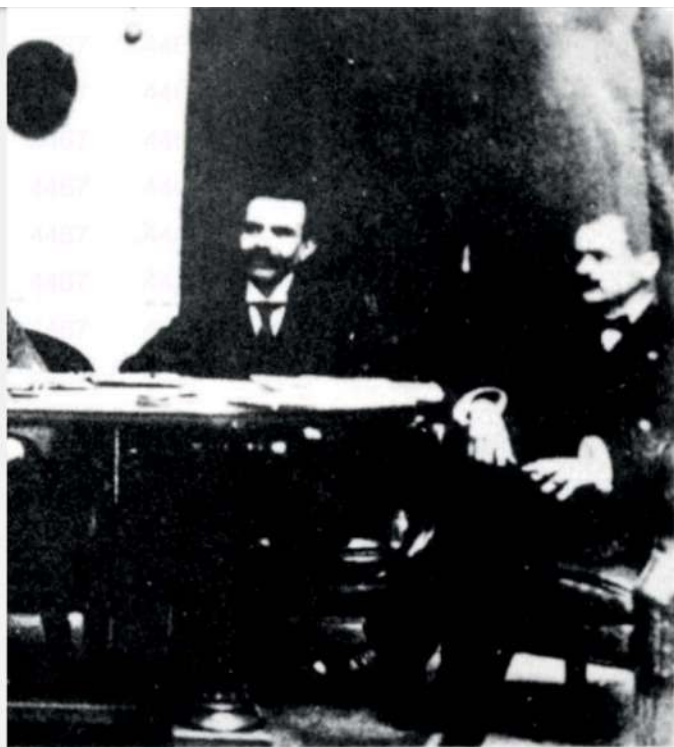
La elección de ese año, explica, fue fundamental: la disyuntiva era continuar el proyecto radical o moderar el rumbo. Múgica ya había mostrado su propia posición siendo gobernador preconstitucional en Tabasco y en su paso por la Huasteca veracruzana, zona petrolera, donde se hizo amigo de Cárdenas y son testigos de la explotación petrolera.

Considera que la designación de Manuel Ávila Camacho no fue un "dedazo" --todavía no existía--, sino que las fuerzas al interior del partido se decidieron por la moderación, no directamente Cárdenas. Ya como presidente, Ávila Camacho nombra gobernador del territorio sur de Baja California a Múgica y secretario de Guerra a Cárdenas.

—¿Entonces Cárdenas no se debatió entre apoyar a uno u otro candidato?, ¿fueron las fuerzas políticas las que decidieron?

—Yo creo que evidentemente Cárdenas sí se debatió entre uno y otro. A lo largo de su sexenio se afectaron muchos intereses nacionales y extranjeros: de los grandes propietarios agrarios, los que tenían posesiones petroleras, los empresarios que vieron una presencia laboral tremenda, entonces había una derecha en pie de lucha.

Esas luchas se concretaron en la fundación del Partido Acción Nacional (PAN) en 1939, creado para frenar el proyecto cardenista. La derecha



La sucesión de 1940

Foto: Archivo Proceso

también vivía un momento trascendente en el mundo, y como muestra menciona el ascenso del nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el triunfo de la facción franquista en la Guerra Civil española.

Cree que Cárdenas intentó evitar una polarización que condujera a un alzamiento, como ocurrió con la República española, o en Italia y Alemania, y optó por la candidatura moderada de Ávila Camacho, quien de cualquier forma era "muy cercano a él" pues había sido su jefe del Estado Mayor y se tenían afecto. Aunque "a partir del 40 la Revolución se empezó a moderar".

Se le comenta a la investigadora que hay una tentación, al imaginar lo que pudo ser el país, de hacer una comparación con Luis Donaldo Colosio, quien tampoco llegó a la Presidencia. Sólo que al priista se le idealiza a partir de un famoso discurso, cuando con Múgica hubo hechos muy concretos:

"Claro. Yo escribí una biografía del general Múgica (*La patria ha podido ser flor. Francisco J. Múgica, una biografía política*; INAH, 1999). Evidentemente, soy una enamorada de su figura histórica y política, y sí, 1940 es un año muy tentador para pensar lo que usted dice: ¿qué habría pasado en México si hubiéramos continuado con el proceso de radicalización justiciera?

"Pero no lo sabemos, eran años donde el debate ideológico con la presencia del fascismo era muy fuerte, y se optó por un camino intermedio que fue salvar lo hecho hasta ese momento por los regímenes de la Revolución y no arriesgarse con un proyecto de mayor radicalismo".

Conservadurismo

En el momento actual se habla también de dos proyectos de nación opuestos, uno que se cree más apegado al cardenismo, sobre todo en lo concerniente a energías, y otro al cual se señala de pretender la privatización.

--La elección de 1940, ¿deja alguna lección?, ¿algo de las ideas de Múgica deberían estar en las plataformas políticas, sobre todo de los sectores que se autodenominan más progresistas?

--Es difícil... hubo una tentación a la hora de la definición de las candidaturas en el partido oficial de tratar de definir quién era Ávila Camacho y quién Múgica. A mí siempre me pareció anacrónica la comparación, y no puede equipararse el proceso de 1940 con el de ahora.

"Pero algo sí es similar: el gobierno actual ha afectado intereses económicos muy poderosos, y también tenemos fuerzas conservadoras que quieren evitar que esto continúe. En ese sentido, creo que sí tenemos un escenario no idéntico --por supuesto han pasado muchos años y el país es otro--, pero hay esa similitud. Es decir, frente a la afectación, los grupos conservadores se organizan para evitar su continuidad.

"Y considero que en el partido oficial, evidentemente, se retoman algunos de los principios de la Constitución del 17 que tienen que ver con el intento de recuperar la soberanía energética perdida a raíz de las reformas peñanietistas, y desde antes en los cambios al artículo 27 que se reformó paulatinamente. Ahí sí hay una intención muy clara".

Hay otros temas, dice la biógrafa, que no ve en la agenda actual, como el agrario: "No oigo hablar de una reivindicación de los pueblos comuneros, por ejemplo". Pero ve "preocupaciones por temas estratégicos de lo que se llamó el nacionalismo revolucionario, que ahora tiene una suerte de renacimiento en el discurso oficial".

Menciona, como ejemplos, los nuevos libros de texto que plantean como parte de un saber la formación de jóvenes con conciencia social, lo cual remite a un proyecto ideológico plasmado en la Constitución del 17.

Para concluir, dice, habría que hacer visibles para la historia a muchos personajes que, ante figuras como Cárdenas o Emiliano Zapata, quedaron en segundo plano. Uno es Felipe Carrillo Puerto, y otro desde luego Francisco J. Múgica, quien al haber redactado la Carta Magna "definió la agenda política por más de cien años".

"Hoy seguimos debatiendo en torno a los grandes temas planteados en esa agenda que fue la Constitución".

PALCOHABIENTES DEL ESTADIO AZTECA:

“RESPETEN NUESTRA PROPIEDAD O ENFRENTARÁN UN PODER MUY FUERTE”



EL HECHO DE QUE LA FIFA EXIGE UN ESTADIO "LIMPIO" PARA PODER COMERCIALIZAR CADA ESPACIO DEL AZTECA DURANTE EL MUNDIAL DE 2026 –DEL CUAL MÉXICO SERÁ SEDE JUNTO CON CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS– ENCENDIÓ EL ENOJO DE QUIENES PAGARON MILLONES DE PESOS POR UN PALCO O UNA PLATEA, ANTE EL AVASALLAMIENTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE DESPOJARLOS TEMPORALMENTE DE SU PROPIEDAD CON LA ANUENCIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL Y DE GRUPO OLLAMANI, LA EMPRESA QUE ES DUEÑA DEL INMUEBLE.

RICARDO OLÍN

Los poseedores de los palcos y plateas del Estadio Azteca, donde en 2026 se disputarán cinco partidos del Mundial de futbol, están preparando acciones legales para defender su derecho de utilizar esos espacios durante este evento deportivo, luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se los ofertó a la FIFA sin que Televisa, la empresa que entonces era la dueña de este inmueble, hubiera llegado primero a un acuerdo con ellos.

"Los palcohabientes del Estadio Azteca son las personas más poderosas de este país: empresarios, políticos, jueces, ministros. Tenemos un poder muy fuerte. Nos estamos preparando con un equipo de abogados para cualquier escenario", advierte Roberto Ruano Ortega, secretario general de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, una organización que se creó hace nueve meses para defenderse de lo que consideran un abuso.

A los 2 mil afiliados que integran dicha asociación no les interesa llegar a un acuerdo económico, lo que quieren es ver desde su lugar la ceremonia de inauguración del Mundial que Estados Unidos, Canadá y México albergarán de manera conjunta, así como dos partidos más de la fase de grupos, un duelo de dieciseisavos y otro de octavos de final.

Ésta será la Copa del Mundo más larga de la historia con la participación por primera vez de 48 países que disputarán 104 juegos y la tercera ocasión que nuestro país será sede de la máxima competencia del futbol internacional.

Pero no todo es fiesta, ya que los poseedores de los palcos y las plateas del recinto ubicado en la Colonia Santa Úrsula, en la Ciudad de México, están inconformes con la nula comunicación y lo que consideran es un maltrato por parte de Futbol del Distrito Federal, SA de CV, empresa encargada de administrar el Estadio Azteca.

Ésta no les ha garantizado que podrán hacer uso de sus palcos y plateas pese a que los contratos firmados en 1962 entre dicha empresa y los compradores establecen como primer derecho el "acceso al Estadio Azteca durante 99 años, en las horas en que tengan lugar juego de fútbol, funciones, eventos u otros espectáculos de cualquier naturaleza que sean a partir de la hora en que se permita la entrada al público hasta el momento en que se termine el espectáculo que se presente".

La venta de palcos y plateas fue un mecanismo creado en 1962 por Emilio Azcárraga Milmo, hijo de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, para financiar una parte de la construcción del Estadio Azteca. Los costos para adquirir un espacio en el inmueble fueron de entre ocho mil a 115 mil pesos de esa época.

El estadio, que tenía una capacidad para 110 mil espectadores, fue inaugurado el 29 de mayo de 1966. Actualmente, el costo de un palco o platea oscila entre los 15 y 20 millones de pesos, dependiendo del número de asientos que tenga.

A poco más de dos años del día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, los palcohábientes y plateahábientes se enfrentan a la incertidumbre de si la FIFA le solicitó a la FMF entregar el estadio "limpio". Hasta la fecha, Fútbol del Distrito Federal no lo ha negado, pero tampoco lo ha confirmado a los interesados.

Asimismo, los afectados no tienen información acerca de la remodelación del inmueble deportivo, de la cual se ha hablado prácticamente desde que la FIFA confirmó que México es uno de los países sede y que 13 partidos se jugarán en territorio nacional en tres escenarios: el Estadio Azteca, el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey.

Según información del propio Roberto Ruano Ortega y de la empresa Ollamani que ahora es la dueña del Estadio Azteca, este inmueble deportivo cuenta con 856 palcos y ocho mil 144 plateas, un total de nueve mil. El 10% de los palcos (85) y el 40% de las plateas (tres mil 257) son propiedad del estadio. El resto están bajo el control de los poseedores que pagaron por el derecho de usarlos.

De acuerdo con el libro de oferta (*bid book*) que las federaciones de fútbol de Canadá, Estados Unidos y México entregaron a la FIFA para postular su candidatura como sedes de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca se ofrecieron 300 palcos (luxury suites) en los que caben cuatro mil 800 personas.

TEMOR DE PERDER SU PATRIMONIO

Ante la incertidumbre y la falta de respuestas nació la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas que el futbolista en retiro y exalcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, preside. Aunque Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, también tiene un palco, no está afiliado a la asociación.

Remodelación obligada

Foto: Eduardo Miranda



Una de las luxury suites

Foto: Eduardo Miranda

Ruano explica que dicha asociación nació para defender los derechos de los titulares ante el pésimo trato que reciben y los actos arbitrarios por parte de quienes administran el Azteca. Los preparativos para el Mundial de 2026 sirvieron para unirse.

“No sabemos nada respecto al tema de la remodelación del estadio, algo que nos concierne porque tiene que ver con nuestro patrimonio. Sabemos extraoficialmente que va a haber algunos titulares de palcos y plateas que se verán afectados por la remodelación. Hay temor de que los vayan a mover de lugar o incluso perderlos”, dice.

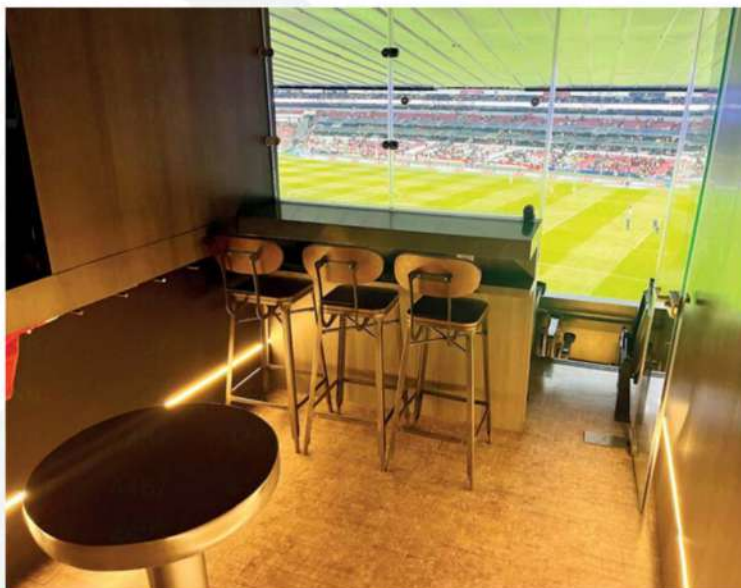
En febrero último, Emilio Azcárraga Jean declaró en el noticiario radiofónico “Así las cosas” de *W Radio* lo siguiente: “Se está platicando con los dueños de los palcos y plateas. El evento es organizado por la FIFA, no es un evento que hace el Estadio Azteca. También estamos viendo la remodelación, pero nos mantenemos en contacto con varios de las asociaciones de dueños”.

Agregó que para su padre, el famoso “Tigre” Azcárraga, fue muy importante la venta de los palcos para la construcción del inmueble y que siempre han respetado a los titulares de esos lugares, por lo que encontrarán la mejor solución para las partes.

Unos días después de esta entrevista Manuel Negrete se reunió con Joaquín Balcárcel, abogado de Televisa; con Félix Aguirre, director del Estadio Azteca, y con Justino Compeán, expresidente de la FMF, quien funge como el mediador entre Fútbol del Distrito Federal y los poseedores de los palcos y plateas.

“Después de esa reunión de cortesía ya no pasó nada. Félix Aguirre sólo pidió que tuviéramos paciencia y que no hiciéramos ruido. Dijo que aún no tienen ninguna solución. Azcárraga Jean tampoco se ha acercado a los asociados. Nosotros tenemos claro que aquí la FIFA es la menos culpable porque presentó sus condiciones y alguien las aceptó, pero sin considerar nuestros derechos que son intocables”.

Este reportero solicitó una entrevista con Félix Aguirre, director del Estadio Azteca, para confirmar si



deberán poner a disposición de FIFA el inmueble “limpio”. La respuesta la dio David Loera, titular de Comunicación Corporativa de Televisa, vía correo electrónico. Aseguró que Ollamani —la empresa creada tras la escisión de Grupo Televisa de el Estadio Azteca, Editorial Televisa, Intermex y PlayCity— sería la responsable de aclarar cualquier duda, pero se limitó a decir que no podían comentar sobre un acuerdo en curso, que sí hay pláticas con los inconformes, así como con la FIFA, la cual, hizo hincapié, es la titular del evento, pero que confían en “llegar a un consenso adecuado para las partes involucradas”.

Una fuente dijo a **Proceso** que en su calidad de intermediario entre Televisa y algunos palcoholhabientes y plateahabientes, Justino Compeán está llegando a acuerdos económicos compensatorios con algunos poseedores para que cedan sus lugares voluntariamente a la FIFA durante el Mundial. Esas negociaciones las realiza por debajo del agua con quienes sí están de acuerdo en no asistir a los partidos del Mundial.

También se solicitó una entrevista a la FIFA a través de la oficina de prensa. La contestación fue que a su debido tiempo se anunciarán detalles específicos sobre el acceso de los aficionados e información adicional sobre los partidos.

El *bid book* que Canadá, Estados Unidos y México entregaron a la FIFA para presentar la candidatura conjunta indica que los tres países ofrecerán comodidad y lujo a partir de asientos exclusivos tipo club hasta suites privadas de lujo y espacios premium, "todo idealmente diseñado para albergar a los líderes e invitados de la FIFA, dignatarios internacionales y a compradores de boletos premium".

EN SEMÁFORO AMARILLO

Roberto Ruano Ortega destaca que los afectados no se quedarán con los brazos cruzados por lo cual se están preparando por si la empresa

que administra el Estadio Azteca prolonga la incertidumbre y ya con el Mundial en la puerta les digan que no tienen acceso a sus palcos y plateas.

"Estamos en la mejor disposición de dialogar porque si mejora el estadio también lo hará nuestro patrimonio, pero con el tiempo que han estado sin informarnos y sin acercarse a nosotros pensamos que no les interesamos. No vamos a ceder nuestros lugares. Ahorita nos encontramos en semáforo amarillo, estamos alertas, pero cuando veamos que las autoridades inician la obra de remodelación sin que estemos enterados pasaremos al rojo".

El contrato que firmaron los poseedores de los palcos y plateas contempla que si no se pudieran presenciar en el estadio uno o varios espectáculos por cualquier otro motivo imputable a Futbol del Distrito Federal, SA de CV, ésta empresa estará obligada a pagar al titular de los derechos respectivos "una pena convencional equivalente al doble del importe de los boletos correspondientes a los asientos que no pudiera usar para ver dichos espectáculos".

En 1962 dicha empresa firmó con los poseedores de los palcos y plateas contratos inominados de aportación para el derecho de acceso y uso, es decir, que al no tener nombre no tienen una regulación específica en la ley sino que se rige por las normas generales de la contratación.

El doctor en Derecho, Joaquín Dávalos Paz, quien se ha desempeñado como asesor, representante y apoderado legal en diferentes empresas, así como en distintas dependencias gubernamentales, explica que la empresa Futbol del Distrito Federal vendió el uso de acceso al Estadio Azteca, de tal manera que quienes pagaron por lo palcos y las plateas no son dueños, sino poseedores por tiempo limitado (99 años).

El abogado precisa que si el Estadio Azteca le impide a los palcohabientes y plateahabientes hacer uso de sus espacios durante los partidos de la Copa del Mundo 2026 cometería un incumplimiento de contrato. En este sentido argumenta que la FIFA no tiene derecho a avasallar las leyes mexicanas, pues ningún organismo deportivo está por encima de la soberanía nacional.

En su opinión la solución legal sería que los afectados interpusieran una demanda de interdicto de retener, la cual procede cuando un poseedor es perturbado en su posesión.

Ruano: "No queremos dinero, queremos ver el Mundial"

Foto: Eduardo Miranda

Por su parte, el investigador de la Universidad Iberoamericana, Samuel Martínez, especialista en la gestión de megaeventos deportivos, considera que la empresa Televisa, como dueña del Estadio Azteca cuando se presentó la candidatura para que México fuera una de los tres países sede del Mundial 2026, es capaz de aceptar cualquier condición impuesta por la FIFA con tal de que ésta le permitiera firmar contratos por derechos de transmisión para ese Mundial, así como de las Copas del Mundo de 2030 y 2034.

"La FIFA negocia de la manera que mejor le conviene y va a cuidar sus intereses. Se da el lujo de romper las leyes locales de cada país que sea sede. Lo hizo en Brasil 2014", dice Martínez.

En ese país la FIFA pidió al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que cediera para vender cervezas en los estadios para cumplir con el contrato que tiene con Budweiser, uno de sus principales patrocinadores.

El ministro de Deportes de Brasil, Aldo Rebelo, dobló las manos y suprimió el 'Artículo de Estatuto del Aficionado' que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los estadios, el cual se implementó para tratar de contener la violencia que había en el país en torno a los partidos de fútbol.

OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES VIOLADAS

Los contratos que los palcohabientes y plateahabientes firmaron con Fútbol del Distrito Federal establecen que tienen derecho a estacionar gratuitamente dos automóviles en el espacio que se les asigne y que pueden circular en el interior del estadio. Para ello cuentan con dos tarjetones y también tienen derecho a ir "al restaurante y al club" del recinto deportivo que, no obstante, no existen.

También señala que la empresa se obliga expresamente a que en el Estadio Azteca tengan lugar todos los juegos ordinarios o extraordinarios, de carácter nacional o internacional, en los que participen cualquiera de los equipos América, Atlante o Necaxa.

"Desde la inauguración del estadio y hasta 1985 los titulares podían circular en el interior del inmueble, pero un año después, por solicitud de la FIFA, dejaron de hacerlo para salvaguardar la seguridad de los peatones. Nos dijeron que de manera provisional nos darían estacionamientos externos en lo que concluía el Mundial de 1986. Pero no fue así, después nos mandaron oficinas de Protección Civil en donde se estipula que ya no podía haber estacionamientos adentro por seguridad de la afición. Tres años después vendieron esos lugares, así que si quieres acceder con tu auto al interior debes pagar 20 mil pesos. Es puro negocio.

"En cuanto al club social y el restaurante, ninguno de los dos existe. Sobre el canje de tarjetas para el estacionamiento nos cobran mil pesos anuales para cambiarlas. Y ni qué decir de los tres equipos de fútbol de Primera División: Atlante se fue a Cancún en 2007, Necaxa a Aguascalientes en 2003 y sólo queda el América".

Ruano revela que en los últimos años la empresa Fútbol del Distrito Federal ha ejercido presión para que los palcohabientes y plateahabientes canjeen sus antiguos títulos por unos nuevos con la excusa de que están dañados y viejos. "Algunos han caído, y en los nuevos les han quitado derechos. Yo tengo el título original y no lo cambiaré".

1970 Y 1986 SÍ PUDIERON USAR LOS PALCOS

En 1970 el Estadio Azteca recibió 10 partidos de la Copa del Mundo y tanto palcohabientes como plateahabientes disfrutaron sin inconveniente de cada uno de ellos haciendo uso de su derecho, pero para el Mundial de 1986 Emilio Azcárraga Milmo quiso cambiar la jugada por la misma situación que se presenta hoy.

"En 1985, Azcárraga Milmo mencionó que en su cuaderno de cargos la FIFA le pedía estadios 'limpios', o sea, quería que los palcohabientes compráramos los boletos para que la FIFA no perdiera dinero. Nos reunimos cerca de 20 propietarios de palcos y plateas y manifestamos que ya habíamos pagado por nuestro lugar y que era nuestro derecho entrar a todos los encuentros. Nos dijo que si no estábamos dispuestos a pagar se llevaría los nueve partidos del Azteca al estadio La Corregidora, en Querétaro", recuerda Ruano.

Tres semanas después se reunieron nuevamente con "El Tigre" y cada propietario llevó su título para exigir su derecho de asistir a los partidos programados en la Ciudad de México. Azcárraga no pudo persuadirlos de cambiar de opinión. Al final, pudieron hacer uso de sus palcos y plateas, aunque Ruano desconoce a qué arreglo llegó el empresario con la FIFA.

Señalamientos de Eduardo López Betancourt sobre el fiscal Gertz Manero

Señor director:

En las publicaciones número VII, página 55, y VIII, página 80, de enero y febrero, respectivamente, aparecen notas donde hacen mención a mi persona, por lo que respetuosamente le solicito, haciendo uso de mi correspondiente derecho de réplica, se publique esta misiva en su próxima edición impresa.

1. En la edición de febrero autorizó la publicación de una carta que me parece injuriosa, que se aleja de la mejor tradición de **Proceso**. Esta nota implica daños a mi honorabilidad sobre los cuales me reservo el derecho de actuar legalmente.

2. La señora que envió dicha carta nunca en mi vida le he tratado ni ha sido mi alumna, menos mi empleada. Hace más de tres años que me ha perseguido y ha declarado que ése es el trabajo para el que fue contratada.

3. El destacado investigador Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, a quien agradezco su solidaridad y espero no le cause perjuicios, en la edición de la revista **Proceso**, número VII, de enero, formuló expresiones diversas sobre mí, donde destaca el “viacrucis” al que me he enfrentado, tanto en lo personal, como familiar.

Al respecto, preciso que, desde hace más de 20 años, el actual fiscal general de la República emprendió acciones deleznales en mi contra; en 17 ocasiones presentó denuncias penales por publicaciones que, como articulista, formulé criticando su gestión, en ese entonces, como secretario de Seguridad Pública nacional y, en concupiscencia (sic) con la Procuraduría del entonces Distrito Federal, a cargo de Bernardo Bátiz, me condenaron a dos años de cárcel, algo insólito. Nótese, un articulista nunca había sido condenado en cien años por escribir contra un político, por lo que mi caso es una ofensa al periodismo mexicano.

4. No conforme con tal infamia, fui agredido por los escoltas del entonces secretario de Seguridad Pública nacional, ahora fiscal general de la República, golpeándonos a mi esposa y a mí, razón por la cual perdimos un hijo en gestación de seis meses; también con Bernardo Bátiz “desaparecieron” mi denuncia, y de manera ridícula y cínica el fiscal en cita presentó una denuncia en mi contra, por golpes, cuando me encontraba en silla de ruedas. Tales hechos fueron debidamente desestimados por jueces, pero el poder del fiscal hizo que un tribunal de alzada me condenara a tres años de cárcel. A mi esposa y a mí nos acusa por resistencia de parturales.

El actual fiscal no cesa su persecución, la mantiene con carpetas de investigación en mi contra. Sobre la ridícula vinculación a proceso que se me hizo, por acoso y por tratos crueles, inhumanos y degradantes, fueron desechadas en el juicio de amparo indirecto 147/2022, en fecha 30 de junio de 2023 por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito con Residencia en la Ciudad de México, y confirmado en sesión pública de fecha 5 de octubre de 2023 dentro del amparo en revisión 228/2023, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México.

En ambos documentos se muestra la plena inexistencia del delito y se destaca la ridícula trama de mi acusación. Las resoluciones han causado estado (cosa juzgada) y, así se precisa por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, en relación al Amparo Indirecto 147/2022, mismo que anexo.

Es de explorado derecho y en elemental sentido legal que, cuando una resolución del más alto tribunal del país ha quedado firme, y así ha sido declarado en mi caso, no admite cambios y sería absurdo conceder amparo sobre amparo.

5. Para evitar la furia y rencor del fiscal general de la República han intervenido personajes de gran calidad moral, entre ellos, en forma particular, la doctora y senadora Olga Sánchez Cordero, quien habló con el fiscal y éste le dijo: “Es cuestión personal y, para que lo perdone, tendrá que escribir tres artículos donde me ‘alabe’, de lo contrario, que se atenga a las consecuencias él y su familia...”. La doctora Sánchez Cordero no daba crédito a la infamia, pero me aconsejó: “Eduardo, como buenos amigos, y por el bien tuyo y de tu familia, obedece al fiscal, publica esos artículos y estoy segura (que) parará la persecución...”.

Lo anterior lo consulté con mi familia y, pese al hecho deshonroso y vergonzante, accedimos al capricho del fiscal; la propia doctora Sánchez Cordero le hizo llegar mis artículos, publicados en medios escritos nacionales, donde, como pedía lo “alababa”. Algo que le confieso, me avergüenza y reconozco, nunca debí haberlo hecho. Lo grave es que, pese a ello, “el fiscal del odio” no dio tregua y siguió con sus agresiones; la doctora Sánchez Cordero se siente abrumada y apenada, sólo me dice: “Qué tipo, qué sujeto y qué impresentable al haberme utilizado para pedirte que accedieras a su capricho...”.

Ese es el fiscal de México, vengativo, perseguidor, pero, más aún, falso y mentiroso, que no sólo en mi caso, sino en muchos otros se ha mostrado cual energúmeno que es.

Atentamente,
Eduardo López Betancourt

palabradelector@proceso.com.mx

Nos **actualizamos**

proceso **app**

Tu fuente

confiable de
noticias



DESCÁRGALA YA



DISPONIBLE EN
Google Play

DISPONIBLE EN
App Store

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

“Triunfalismo riesgoso”



3b9d1128-5107-430f-bc9f-d57384cbf62a

EL HERALDO
DE MEXICO



**EL MEDIO DIGITAL MÁS
VISITADO EN TODO MÉXICO**

NOS INSPIRAS A SEGUIRTE INFORMANDO

HERALDO MEDIA GROUP

3b9d1128-5107-430f-bc9f-d57384cbf62a



Comscore febrero 2024



Llegamos a **La Villa** para
redefinir el futuro de la movilidad



HAVAL H6
HÍBRIDA



HAVAL JOLION
HÍBRIDO Y GASOLINA



ORA 03
ELÉCTRICO

7 Años de garantía
Kilometraje ilimitado
DEFENSA A DEFENSA

Visita nuestra sucursal en:
Av. Ferrocarril Hidalgo 1008
Col. La Villa, Gustavo A. Madero

Tel: 55 9377 2666

Síguenos en FB e IG

